

**LA EFECTIVIDAD DE LA REPARACIÓN COLECTIVA COMO MECANISMO DE
JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS
DEL SUJETO DE REPARACIÓN “EL TIGRE” DESDE EL AÑO 2013 HASTA EL
AÑO 2020**

ENRIQUE ARDILA FRANCO
Maestría en Derecho Constitucional
Director: Dr. Héctor Wiesner León

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
BOGOTÁ D.C.
2021

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

Rector: **Dr. Juan Carlos Henao Pérez**

Secretaria General: **Dra. Martha Hineirosa Rey**

Decana Facultad de Derecho: **Dra. Adriana Zapata Giraldo**

Directora Departamento

Derecho Constitucional: **Dra. Magdalena Inés Correa Henao**

Director de Tesis: **Dr. Héctor Wiesner León**

Examinadores: **Dr. Juan Pablo Hineirosa Vélez**

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al universo, que me ha permitido siempre convertir las dificultades en oportunidades, los problemas en soluciones y las pérdidas en ganancias.

Al universo por todas las cosas buenas de mi vida: mi familia, mi pareja, mis experiencias vividas, los amigos y las que están por venir.

A las víctimas del conflicto armado colombiano, porque me han enseñado que a pesar de todas las dificultades, todas las adversidades, es posible seguir soñando por un mejor país. He recorrido el país escuchándolos y en sus caras veo que a pesar de todo son felices.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. REPARACIÓN COLECTIVA EN COLOMBIA.
 - 1.2 UNA MIRADA CONSTITUCIONAL E HISTÓRICA AL TEMA DE LA REPARACIÓN.
 - 1.3 EL ESTADO Y SU RESPUESTA POLÍTICA.
 - 1.4 CONTEXTUALIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA COMO MECANISMO DE JUSTICIA TRANSICIONAL.
 - 1.5 RECONOCIMIENTO DE UN CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA. ..
 - 1.6 LA REPARACIÓN COLECTIVA Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
 - 1.7 EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN.
 - 1.8 SUJETOS INDIVIDUALES Y SUJETOS COLECTIVOS.
 - 1.9 ATRIBUTOS DEL PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA.
 - 1.10 ELEMENTOS DE LA REPARACIÓN COLECTIVA
 - 1.11 LA REPARACIÓN COLECTIVA EN EL DERECHO COMPARADO.
 - 1.12 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE REPARACIÓN COLECTIVA.
 - 1.13 ATRIBUTOS DE SUJETOS COLECTIVOS.
 - 1.14 PRÁCTICAS COLECTIVAS DE SUJETOS COLECTIVOS.
2. EL CASO: SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA “EL TIGRE”. EL CONTEXTO Y LA SU REPARACIÓN INTEGRAL.

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN

2.2 EL DÍA QUE “EL TIGRE” LLORÓ

2.2.1 LOS SUJETOS INDIVIDUALES QUE CONFORMAN EL SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA EL TIGRE (COMO EJERCICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA).

2.1.2. EL PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL A EL TIGRE (PUTUMAYO) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO.

I) EL TIGRE, COMO PRUEBA PILOTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE UN SUJETO COLECTIVO.

2.1.3. LAS DISTINTAS FORMAS Y ETAPAS DE LA REPARACIÓN COLECTIVA DEL SUJETO COLECTIVO EL TIGRE.

2.1.4. LOS REPAROS PRESENTADOS POR LA COMUNIDAD SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA EL TIGRE A SU REPARACIÓN INTEGRAL.

2.1.5. PROBLEMA JURÍDICO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CUAL FUE OBJETO EL SUJETO DE REPARACIÓN INTEGRAL EL TIGRE.

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

3.1. RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES.

3.2. BREVE EVALUACIÓN AL PROYECTO PILOTO.

REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Resumen

La comunidad de El Tigre, en el Valle del Guamuez, Departamento de Putumayo, fue piloto en el proceso de reparación colectiva en Colombia, dicho proceso se inició en el año 2008, ello bajo la vigencia de la Ley 975 del 2005, empero, con posterioridad aparece la Ley 1448 de 2011, y su Decreto Reglamentario 4800 del mismo año, que trae algunos aspectos novedosos entorno a la reparación colectiva, ello, producto del aprendizaje de las pruebas piloto realizadas, dejando a ésta comunidad al margen de los nuevos enfoques de reparación, lo que contraría el espíritu de recomposición de su estructura social. El presente texto se propone evidenciar la contradicción inmersa en el proceso de reparación del sujeto colectivo El Tigre, quien a la luz de la normatividad vigente no puede ser “doblemente reparado”, advirtiendo que en su reparación inicial hubo vacíos que la experiencia debió cubrir y que la marginan de manera injusta.

Palabras clave:

Memoria, sujeto de reparación colectiva, verdad, reparación colectiva, justicia transicional, conflicto armado en Colombia, plan integral de reparación colectiva, daños.

Abstract

The community of El Tigre, in the Guamuez Valley, Putumayo Department, was a pilot in the collective reparation process in Colombia, said process began in 2008, under the validity of Law 975 of 2005, however, Subsequently, Law 1448 of 2011 appears, and its Regulatory Decree 4800 of the same year, which brings some novel aspects around collective reparation, this, as a result of the learning of the pilot tests carried out, leaving this community aside from the new repair approaches, which goes against the spirit of recomposition of its social structure. This text aims to show the contradiction immersed in the process of reparation of the collective subject El Tigre, who in light of current regulations cannot be “doubly repaired”, noting that in his initial reparation there were gaps that the experience had to cover and that marginalize her in an infamous way.

Key words

Memory, subject of collective reparation, truth, collective reparation, transitional justice, collective reparation plan, damages.

INTRODUCCIÓN:

El conflicto armado en Colombia ha estado a lo largo de la historia inmerso en las zonas rurales y marginales del país, dado que dicha aparición de fenómenos de violencia ha sido por la presencia de escenarios con abundantes recursos naturales y por poderíos de territorios. Esto a su vez ha requerido de grandes esfuerzos por parte del Gobierno Nacional y territorial para llevar a cabo un proceso de desarticulación de los actores ilegales.

A lo largo de este proceso, se ha requerido de un análisis normativo de forma interna como también externa, dado que el conflicto armado en el país ha llegado a tener una gran influencia en el ámbito internacional en lo que se ha conocido como justicia transicional, cuyos orígenes se remontan al desarrollo de las guerras mundiales en el siglo XX. Además del apoyo que han recibido los diferentes procesos de paz en Colombia por parte de la comunidad internacional y especialmente, de organizaciones como las Naciones Unidas, así como del respeto del derecho internacional, los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Estatuto de Roma, etc.

A pesar de que la entrega de armas y la judicialización de los responsables de los delitos de lesa humanidad es un paso importante de los procesos de desmovilización o de paz, también es sumamente importante mencionar el papel de las víctimas dentro de la justicia transicional, como garantía de la generación de una verdadera voluntad de paz y de la garantía de no repetición dentro del conflicto.

Por ello, el Estado colombiano por medio de los diferentes gobiernos nacionales y territoriales han tratado de brindar una estabilidad de paz para la sociedad, y a la luz de estos enfoques, adquiere especial interés en investigar en ¿qué medida ha sido efectiva la reparación colectiva como mecanismo de justicia transicional en el

restablecimiento de los derechos del sujeto de reparación “el tigre” desde el 2013 hasta el 2020?

Una respuesta a priori gira en torno a que la reparación colectiva es un mecanismo efectivo de la justicia transicional para reparar de forma integral a las víctimas del conflicto armado, sin embargo, en este proceso se han identificado vulneraciones a los derechos sufridos por los diferentes sujetos colectivos, especialmente para el sujeto de reparación colectiva “El Tigre” el cual requiere la respuesta no solo de un gobierno sino que esté acompañado de un proceso de seguimiento y monitoreo por parte de todo el Estado Colombiano.

Como parte de la metodología de este trabajo de investigación se hace una recopilación de las normas, leyes, decretos y resoluciones más relevantes en materia de justicia transicional y del marco conceptual referido a las víctimas y a las comunidades.

Así mismo, hay un capítulo especial referido a la comunidad de El Tigre, haciendo una caracterización histórica, geográfica y social de lo que ha sido esta colectividad en el Departamento del Putumayo, conocer los hechos concretos que sufrieron dentro del conflicto y mostrar sus propuestas para una correcta reivindicación y reparación por los actos sufridos durante la guerra en el país, que permitan sacar reflexiones y análisis frente a cómo puede el Estado abrir espacios de diálogo e inclusión con las comunidades para crear acuerdos que permitan a estas personas retomar en la medida de lo posible su estilo de vida, antes de haber padecido las acciones de los grupos paramilitares y guerrilleros.

Finalmente se realizará unas recomendaciones y conclusiones que permitan al Estado colombiano operar en conjunto para lograr procesos de reparación colectiva de una forma integral y unificada, logrando un acercamiento a la población más vulnerable, la que lo ha sido a raíz de tanta violencia a lo largo de la historia.

EFFECTIVAD DE LA REPARACIÓN COLECTIVA COMO MECANISMO DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL SUJETO DE REPARACIÓN “EL TIGRE” DESDE EL AÑO 2013 HASTA EL AÑO 2020

1. REPARACIÓN COLECTIVA EN COLOMBIA

*“El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva,
pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”.*

Tzvetan Todorov

1.2 UNA MIRADA CONSTITUCIONAL E HISTÓRICA AL TEMA DE LA REPARACIÓN.

La Constitución Política de 1991 introduce el principio nuclear e innovador respecto de su estructura al afirmarse Estado Social de Derecho,¹ con lo cual, en virtud de dicha categoría, su artículo primero certifica ser una organización unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general². Respecto de tal naturaleza enervada en la Constitución, Villar Borda precisó que: “Los capítulos 2 y 3 de la carta desarrollan ese principio en cuarenta artículos, además todo el conjunto normativo de la Constitución debe ser interpretado en consonancia con el”³

Es sin duda alguna supremamente poderosa la idea de que una democracia se desarrolle en un Estado Social de Derecho, al respecto Cabrera Suarez indicó:

¹ Borda, L. V. (2007). Estado de derecho y Estado social de derecho. Rev. Derecho del Estado, 20, 73. p. 73.

² Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

³ *Ibidem*. p. 73.

Primero, se considera al Estado como una organización suprema frente al hombre y es así como, a pesar de que aquel surge por voluntad de este y para su propio ordenamiento, ingenuamente ese concepto supra queda por encima del ser humano y es a este a quien le corresponde reivindicar su “postura” de individuo valioso, sin la cual no hay Estado. Luego, esa búsqueda de posicionamiento del hombre frente al Estado amerita el surgimiento del Estado de Derecho, en el que el hombre tiene valor, pero al estar subyugado a la fría norma se hace necesario entonces continuar la crítica, el estudio y el análisis que permitan ubicar el punto exacto en que el ser humano y sus derechos se encuentran frente al Estado. Surge así el Estado Social de Derecho y con él, una relativa tranquilidad que ha ido ganando el hombre frente al Estado⁴

Sin embargo, dicha consolidación no ha sido fácil, Colombia ha tenido procesos en los cuales ha estado en un devenir constante en razón a la misma estructuración histórica del país,⁵ prueba de ello es que se cuenta con un conflicto armado⁶ de larga data, y que ha sido uno de los protagonistas principales que ha dejado efectos negativos para las instituciones y su sociedad, como lo expresa Gonzalo Sánchez ex Director del Centro Nacional de Memoria Histórica en el prólogo del informe general del grupo de memoria histórica *¡Basta Ya! Colombia: “Memorias de Guerra y Dignidad”* “... Las guerras pueden destruir o transformar las sociedades, pero ellas también se transforman por sus exigencias internas o por sus variaciones inesperadas de los contextos que propiciaron su desencadenamiento... en Colombia se ha destruido más que transformado”⁷

⁴ Suárez, L. A. C. (2018). El significado real de que Colombia sea un Estado Social de Derecho. DIXI, (27), 5. p. 7-8 [En Línea]. Recuperado de <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/2390/2420>

⁵ Villa, H. V. (1987). Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano (No. 11). Universidad Nacional de Colombia. p.

⁶ Uprimny, R. (2005). ¿Existe o no conflicto armado en Colombia? p. 4. [En Línea]. Recuperado de <https://www.dejusticia.org/existe-o-no-conflicto-armado-en-colombia/>

⁷ Fajardo Cely, Diego Mauricio. (2014). Grupo de Memoria Histórica, *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad* (Bogotá: Imprenta Nacional, 2013), 431 pp. Historia y Sociedad, (26), 274-281. [En Línea]. Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf>. Este informe da cuenta de más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Revela la

Algunos datos que nos permiten dimensionar y entender la letalidad de violencia vivida en Colombia inician con precisar que se trata del conflicto armado más antiguo y sangriento de la historia contemporánea de América Latina⁸. Según la investigación presentada por el Grupo de Memoria Histórica permite concluir que en desarrollo de dicho conflicto se ha causado la muerte de 220.000 personas aproximadamente, ello ocurrido entre el primero de enero de 1958 y el treinta y uno de diciembre de 2012,⁹ a más de lo anterior, estadísticamente se cuenta con que al primero de mayo del 2020 el Registro Único de Víctimas¹⁰ – RUV – instancia que hace parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reportó, registradas en calidad de víctimas, la histórica cifra de 9'005.319 personas.

Colombia ha estado sumergida en más de 50 años de guerra¹¹, originada entre otros aspectos por el narcotráfico, la fragmentación institucional y la desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra (persistencia del problema agrario¹²), al respecto Perry indicó:

En el siglo XIX se presentaron importantes conflictos entre campesinos y latifundistas alrededor de la estructura agraria del país y de la apropiación de las tierras, cuyo espectro estuvo presente en casi todas las guerras civiles que azotaron a la joven república.

magnitud, ferocidad y degradación de la guerra interna del país, y las graves consecuencias e impactos sobre la población civil. Así mismo reporta la participación cambiante de múltiples actores legales e ilegales, por su extensión geográfica y por las particularidades que asume en el territorio.

⁸ Serbin, A. (2008). La sociedad civil ante la violencia y los conflictos en América Latina y el Caribe. Pensamiento iberoamericano, (2), 141-162. P. 145 [En Línea]. Recuperado de file:///C:/Users/Home/Downloads/Dialnet-LaSociedadCivilAnteLaViolenciaYLosConflictosEnAmer-2873337%20(1).pdf

⁹ Fajardo Cely, *op. cit.*, p. 20.

¹⁰ El Registro Único de Víctimas fue creado a partir del Artículo 154 de la Ley 1448 del 2011 como un mecanismo para garantizar la atención y la reparación efectiva de las víctimas. El RUV reúne a las víctimas reconocidas en la Ley 397 de 1997 (desplazamiento forzado), la Ley 418 de 1997 (convivencia y justicia), el Decreto 1290 de 2008 (reparación individual), la Ley 1448 de 2011 (víctimas y restitución de tierras) y las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005 (justicia y paz).

¹¹ Quevedo, M. D. P., & Jara, S. J. R. (2015). Conflicto y posconflicto: el futuro anhelado, hoy. Ignis, (8), 53-57. p. 54. [En Línea]. Recuperado de <http://investigaciones.cun.edu.co/investigaciones/ojs/index.php/ignis/article/view/165/155>

¹² Vázquez, T. (2009). El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado. Revista Controversia, (192), 122-161. p. 123 [En Línea]. Recuperado de <https://revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=122&path%5B%5D=123>

Aquellos tuvieron como eje la disputa por la propiedad de los baldíos y de las tierras pertenecientes a las corporaciones religiosas¹³

Esta situación ha impactado negativamente en las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales del país, especialmente en las regiones que han tenido que subsistir ante los problemas que han surgido a causa del conflicto armado. Algunas de estas son: el desplazamiento masivo, bajos niveles de educación, baja cobertura de salud, desigualdad y pobreza.¹⁴ En tal sentido Galvis y Roca afirman:

En Colombia, en la década de los noventa, las políticas de descentralización, que se reforzaron a partir de la Constitución Política de 1991, llevaron a un esquema en el que las regiones (municipios y departamentos) obtienen transferencias o participaciones del presupuesto nacional (SGP) y de los fondos provenientes de la explotación de los recursos naturales. Estos últimos corresponden a las regalías, y se dividen en las directas, que son apropiadas por los departamentos y municipios donde se realiza la explotación del recurso, y las indirectas, que componen el Fondo Nacional de Regalías, FNR, y se asignan de acuerdo a los proyectos que presentan y se les aprueban a las entidades territoriales (es decir, las que se asignan por demanda). Uno de los objetivos que se esperaba alcanzar con la descentralización era la reducción de las desigualdades económicas regionales. Sin embargo, lo que se ha observado después de 1991 ha sido un aumento en esas disparidades interregionales. Por ejemplo, el coeficiente de variación del PIB per cápita departamental ha tenido una tendencia al aumento.¹⁵

¹³ Perry, S. R. (1994). Las luchas campesinas en Colombia. Bogotá: Ministerio de Agricultura. Restrepo, Juan Camilo. 2002. Reflexiones sobre la descentralización en América Latina. Economía y Desarrollo 1 (2): 5-11

¹⁴ Bejarano, Jesús. Antonio. (1989). Construir la paz: seminario paz, democracia y desarrollo. CINEP.

¹⁵ Galvis, L. A., & Roca, A. M. (2010). Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: Un análisis espacial (No. 120). Banco de la Republica de Colombia. p.3 [En Línea]. Recuperado de https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/3014/dtser_120.pdf

Es por ello, que los conflictos armados se mantienen desde la base de la pobreza y la exclusión social de un país¹⁶, lo cual suscita a una economía asimétrica, en el que la riqueza de los recursos naturales genera valor agregado y a su vez es herramienta de guerra y disputa de poder¹⁷. Sumado a esto, el conflicto armado en Colombia ha tenido un mayor impacto en actividades que involucran al campo, en tanto las estrategias de las guerrillas estaban encaminadas hacia el control territorial¹⁸.

En conclusión, la génesis del conflicto armado en Colombia hunde sus raíces en la luchas por la tierra y su distribución, al ser el Estado incapaz de hacer presencia en las zonas rurales del país, mediante el acompañamiento de instituciones como la fuerza pública y también mediante la asistencia e inversión social, fue relativamente rápida la explosión de conflictos entre civiles como campesinos, hacendados, terratenientes, etc., que se caracterizaron por la violencia armada y política que a su vez desembocó en hechos de desplazamiento forzado.

1.3. EL ESTADO Y SU RESPUESTA POLÍTICA.

La respuesta por parte del Estado Colombiano en sus diferentes gobiernos han sido principalmente militar y en algunas ocasiones políticas, todas ineficaces para conjurar el conflicto, pues militarmente no ha dado los resultados esperados y los acercamientos políticos pretendieron dar algunas soluciones, pero finalmente fueron de corto plazo y por demás poco efectivas, pues las condiciones de las zonas rurales no parecen mejorar, por el contrario, continúan con un bajo acceso a mercados locales para la comercialización de productos que cosechen los

¹⁶ Nasi, Carlo, & Angelika Rettberg. (2005). Los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en evolución permanente. Colombia internacional, (62), 64-85. P. 67. [En Línea]. Recuperado de <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint62.2005.04>

¹⁷ Cortés, Rosalvina Otálora. (2008). Economías de guerra e inversión multinacional. Diálogos de saberes, (29), 157-172. P. 159. [En Línea]. Recuperado de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dialogos/article/view/2045/1569>

¹⁸ Echandia, Castilla. Camilo (1997). Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. pp. 225. p.

campesinos y la escasa asistencia técnica¹⁹ sigue siendo un factor común en las zonas rurales del país²⁰. En tal sentido Bernal precisó:

*Que la situación virtual de guerra que viven muchas regiones del sector agropecuario colombiano representa la profunda crisis del entorno institucional legal, social y político, ello es indudable. En dichas regiones los sistemas de producción, intercambio y distribución, además de la salvaguardia de los derechos individuales y la integridad personal se hayan afectados en gran medida.*²¹

Es importante mencionar que uno de los vacíos que ha tenido el Estado frente a la atención oportuna del conflicto y de las víctimas es que los esfuerzos han sido principalmente militares, es decir, mediante el envío de tropas a las zonas donde hay presencia de grupos al margen de la ley, no obstante, es preciso decir que la inversión social en materia de educación, vivienda, salud, alimentación también son ejes sociales que permiten la reparación integral de los derechos civiles vulnerados, además de garantizar el retorno de los desplazados a sus lugares de origen, así como el respeto por sus propiedades, viviendas y demás propiedades, y que estas no sean tomadas por otros interesados o por los actores del conflicto armado.

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que en este apartado se va a contextualizar, caracterizar y conceptualizar la reparación colectiva para los sujetos colectivos como mecanismo de justicia transicional en el marco histórico del conflicto interno de Colombia. Así mismo, se analizará los atributos del proceso de reparación colectiva que actualmente se implementa para una reparación integral.

¹⁹ Caravaca, I., González, G., & Silva, R. (2005). Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo territorial. EURE (Santiago), 31(94), 5-24. p. 6. En Línea]. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612005009400001&script=sci_arttext.

²⁰ CORREA, Edelmira Pérez. Una visión del desarrollo rural en Colombia. Cuadernos de desarrollo rural, 1998, no 41. p.8 [En Línea]. Recuperado de file:///C:/Users/Home/Downloads/2371-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8235-1-10-20120516.pdf

²¹ Bernal, Fernando. Poder y crisis institucional en el campo colombiano. Iica (Vol. 6)., 1998. p. 16.

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA COMO MECANISMO DE JUSTICIA TRANSICIONAL.

A pesar de ello, Colombia ha reunido esfuerzos para recuperar la paz²², teniendo en cuenta su reciente proceso histórico como ejemplo de no repetición²³. De acuerdo con Vela, la paz es un instrumento de desarrollo equitativo pero muy precario, por lo que, para que exista paz, se necesita que se consoliden relaciones internacionales basadas en justicia y cooperación para el crecimiento de un país.²⁴

No obstante, es importante aclarar que producto del conflicto armado interno en Colombia los conceptos “víctima” y “reparación” han tomado un protagonismo en las últimas décadas. Por esta razón, el Estado colombiano, en aras de cumplir con las exigencias de justicia transicional, ha diseñado el marco jurídico para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno²⁵ terreno abonado por el acuerdo final para la paz.

No es poca la importancia de esos compromisos adquiridos por Colombia derivados del Acuerdo final de paz frente a la protección de los derechos humanos, en tal sentido Wiesner León indicó:

Como se comenta, el contenido imperativo de las obligaciones de Derechos Humanos ha sido reiteradamente reconocido por Colombia a lo largo del siglo XX. Esto no es ajeno a lo pactado

²² Wiesner León, Héctor. “Una perspectiva habermasiana de la justicia transicional en el proceso de paz en Colombia”. En: Montes Cortés, C., Moreno Cruz, D., Estrada Valencia, F., Padrón Pardo, F., Barbosa Delgado, F., Vargas Vaca, H., León, H., Caicedo Chaparro, J., Correa Henao, M., Lozada Gómez, M., Medina García, M., Ordóñez Narváez, V. y Sierra León, Y. (2018). ¿El estado constitucional en jaque? Tomo III. Bogotá, Colombia: Fundación Universidad Externado de Colombia. p. 203.

²³ Duque Morales, C. R., & Torres Restrepo, L. M. (2015). Las garantías de no repetición como mecanismo permanente para la obtención de paz. P. 271 [En Línea]. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/44505>

²⁴ Vela Orbeagozo, Bernardo. Colombia no es una isla.: Una contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en el entorno global. U. Externado de Colombia. 2015. Pp. 284. p. 12.

²⁵ Hernández, L. A. (2016). Prueba, verdad, verifobia en la justicia transicional. Tensión Derecho, Paz y Justicia, Colombia, Ley 975 del 2005. p. 25.

en el Acuerdo final de paz, cuyo contenido es, en parte, coincidente con el contenido de estos tratados y convenciones²⁶.

En los últimos años, los gobiernos de Colombia han dirigido esfuerzos para implementar políticas públicas que están orientadas a la reparación integral de las víctimas, así como también han realizado lineamientos que tienen como fin fortalecer el aparato judicial y administrativo para generar condiciones favorables con el fin de promover y consolidar la paz²⁷. Dichos esfuerzos se evidencian en el informe presentado en el año 2018 por parte de la Presidencia de la República en el que se indica que:

Como parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) se resalta el componente de participación de las víctimas, el cual promueve el fortalecimiento de la democracia participativa, la recuperación de la confianza y la promoción de la reconciliación nacional. Asimismo, el componente de participación constituye pieza sustancial de la estrategia adelantada por el gobierno nacional para afrontar las consecuencias del conflicto armado y la superación del estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004. Entonces, el Protocolo de Participación Efectivo de las Víctimas, reconocido por la Corte Constitucional como el instrumento que garantiza el derecho a la participación y por lo cual declaró la superación del estado de cosas inconstitucional para el componente de participación, por medio del Auto 373 de 2016, debe considerarse como uno de los mayores logros

²⁶Wiesner León. Héctor. Op. Cit. p. 209.

²⁷ ARIAS, Gerson, et al. Consolidación de Paz en Colombia. Una experiencia integrada en DDR y Desarrollo. Fundación Ideas para la Paz, 2018. p.20. [En Línea]. Recuperado de <http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/II%20Gira%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Sur-Sur.pdf>

*del Gobierno Nacional en cuanto al componente de participación de la política pública*²⁸.

Dicha estructura de asistencia surge a partir del 31 de julio del 2012 cuando el Congreso de Colombia aprobó una reforma a la Constitución conocida como Marco Jurídico para la Paz que elevó a rango constitucional la justicia transicional.^{29/30}

En este sentido, resulta importante mencionar aquellas normas y decretos que se han constituido a lo largo del tiempo como marco normativo de la justicia transicional en Colombia, la ley 387 de 1997³¹ y sus decretos reglamentarios 951, 2562 y 2569 de 2000 que adoptó medidas para la prevención del desplazamiento forzado, convirtiéndose en uno de los primeros instrumentos legislativos que buscó reparar a las víctimas del conflicto armado interno de Colombia.³² En esta, es importante señalar que en estricto sentido no enuncia un concepto formal de reparación integral, si no algunos elementos y medidas de prevención, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica en torno a las principales necesidades del desplazado, no obstante, en esta ley no se identificó los problemas estructurales y las causas principales que generan el desplazamiento.³³

Frente al principio de reparación integral Bello indicó que:

²⁸ Colombia, C.D. (2018) Presidencia de la República de Colombia. XIII Informe sobre los avances de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto. Julio – 2018. P. 7. [En Línea]. Recuperado de: <http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2018/Documents/informeactualizadoUnidadVictimas.pdf>

²⁹ Acto Legislativo 01 del 2012, Congreso de la República de Colombia, “*Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*”, [consultado el 2 de junio del 2013], sin embargo es necesario hacer un previo análisis normativo en el que mostremos cómo se ha concebido la reparación integral dentro de la justicia transicional en Colombia, en pro de resarcir a las víctimas del conflicto armado interno.

³⁰ Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia: “*La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento*”.

³¹ Reglamentada Parcialmente por los Decretos Nacionales 951, 2562 y 2569 de 2001 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

³² GARCÍA SAYÁN, Diego; GIRALDO MUÑOZ, M. Reflexiones sobre los procesos de justicia transicional. Revista Journal of International Law, 2016, vol. 7, p. 96-143. p. 99 [En Línea]. Recuperado de <https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ejil/article/view/4581/3847>

³³ Aguilera, M. (2001). Amnistías e indulto, siglos XIX y XX en Revista Credencial núm. 137. Disponible en <http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-137/amnistia-e-indultos-siglos-xix-y-xx>.

Sobre la manera como se ha manejado el proceso de exigibilidad del derecho a la reparación, las instituciones han introducido distintas categorías de personas que antes no existían en el seno de la comunidad. En este sentido, ahora se habla, de quienes sufrieron la pérdida de familiares, las víctimas, de quienes han sufrido daños físicos, o simplemente, de quienes hacen parte del colectivo. En esta lógica, las dos últimas categorías no son reconocidas como víctimas, lo que reduce el concepto de daño, desconociendo los ámbitos colectivo y moral. Por consiguiente, el tema de la indemnización se ha centrado exclusivamente en lo material y lo económico, perdiendo de vista elementos fundamentales como el fortalecimiento del "nosotros", que plantea el resarcimiento del interés común y lo cultural-social que debe privilegiarse en culturas como la indígena y la afrocolombiana.³⁴

En este orden de ideas, la situación de los desplazados en Colombia generó una crisis humanitaria que requería de atención inmediata³⁵. Al respecto la Corte Constitucional, declaró el estado de cosas inconstitucional principalmente por considerar la gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada, advertido por el elevado volumen de acciones de tutela y la precaria capacidad de respuesta de las entidades competentes³⁶.

Así mismo durante 1997, se expidió la Ley 418³⁷ prorrogada por la Ley 548 de 1999³⁸, reglamentada por los decretos 128 de 2003, 2767 de 2004, 395 de 2007,

³⁴ BELLO, Martha Nubia, Martín Cardinal, E., Millán Echeverría, D. C., Pulido Herráez, B., & Rojas Isaza, R. (2005). Bojayá, memoria y río. Violencia política, daño y reparación. Violencia contra las mujeres/Violencia de género. p. 93

³⁵ PÉCAUT, Daniel. La pérdida de los derechos, del significado de la experiencia y de la inserción social: a propósito de los desplazados en Colombia. Estudios Políticos, 1999, no 14, p. 13-28. p.25.

³⁶ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-025 (22 de enero de 2004). M.P. Dr. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. Y Sentencia T-045 (2 de febrero de 2010). M.P. Dra. CALLE CORREA, María Victoria.

³⁷ LEY 418 DE 1997. (diciembre 26). Diario Oficial No. 43.201, de 26 de diciembre de 1997. "Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones".

³⁸ LEY 548 DE 1999. (diciembre 23). Diario Oficial No 43.827, de 23 de diciembre de 1999. "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones".

1059 de 2008 y 1980 de 2012, modificada por la ley 782 de 2002³⁹, instrumentos legislativos por los cuales surgen mecanismos legales para flexibilizar las obligaciones jurídicas y encaminar la paz. Esta ley, generó diferentes espacios para la desmovilización y reincorporación a la sociedad de excombatientes⁴⁰. Sin embargo, presentó inconvenientes en no incluir los mecanismos pertinentes para resarcir a las víctimas, por lo que tampoco se evidenció lineamientos de reparación integral.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Ley 975 de 2005⁴¹ o Ley de Justicia y Paz permitió que a los miembros de grupos armados al margen de la Ley autores de delitos no indultables ni amnistiables como los de lesa humanidad, se les pudiera dar un tratamiento de reinserción y reincorporación a la sociedad. Esta ley, tuvo como objetivo: “Facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”⁴², regulando a su vez lo concerniente a “la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a estos grupos, (...) como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional”⁴³.

En el año 2011 se expidió La Ley 1448 de 2011⁴⁴, comúnmente conocida como “ley de víctimas y restitución de tierras”, misma que contiene una serie de disposiciones generales sobre el marco y principios que la orientan, esto es: derechos de las

³⁹ LEY 782 DE 2002. (diciembre 23). Diario Oficial No. 45.043, de 23 de diciembre de 2002. “*Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones*”.

⁴⁰ López Díaz, C., González, D. & Errandonea, J. (2012). Justicia transicional en Colombia. En A. Forer & C. López Díaz (Eds.), Colombia: un nuevo modelo de justicia transicional. Bogotá, D. C.: GIZ. p. 15.

⁴¹ LEY 975 DE 2005. (julio 25). Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. “*Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.*”

⁴² Art. 1. Ley 975 de 2005.

⁴³ Art. 2. *Ibidem*

⁴⁴ LEY 1448 DE 2011. (junio 10). Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011. “*Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.*”

víctimas dentro de los procesos judiciales; medidas administrativas de asistencia, atención, ayuda humanitaria y reparación; un proceso con una fase administrativa y otra judicial para la restitución de tierras; la creación de entidades y la transformación de otras para establecer la institucionalidad encargada de la aplicación de la ley; medidas específicas de protección integral a los niños, niñas y adolescentes y se instauran mecanismos de participación para las víctimas⁴⁵.

Frente a los fines y logros de la ley de víctimas, Rettberg expresó:

*La ley recogió y transformó muchos de los legados que en materia de reparación había inaugurado la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005, y dio, así, una continuidad institucional de una década al tema de la reparación en Colombia. El andamiaje institucional en el que se apoya la implementación de la Ley de Víctimas ha logrado desarrollar presencia en múltiples regiones colombianas, consta de un proceso eficaz de registro y atención y ha logrado sistematizar la información de las personas que se declaran víctimas, lo cual supera una de las brechas clásicas en el monitoreo de las políticas humanitarias, referida a la ausencia de datos comparables, y permite hacerle un cercano seguimiento a la implementación de la ley. Al amparo de la ley se ha desarrollado una importante capacidad técnica, que abarca desde la atención psicológica hasta la asesoría en la inversión de los recursos de la reparación en las diversas comunidades que lo requieren.*⁴⁶

En el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 (Víctimas y Restitución de Tierras), se define a la reparación integral como:

El derecho que tienen las víctimas a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han

⁴⁵ PRADA, N y Poveda, N. (2012). 32 preguntas y respuestas a la ley de víctimas. Bogotá: Corporación Humana.

⁴⁶ RETTBERG, Angelika. Ley de víctimas en Colombia: un balance. Revista de estudios sociales, 2015, no 54, p. 185-188. p. 186. [En Línea]. Recuperado de: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res54.2015.14>

sufrido como consecuencia de las violaciones [...]. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

En un Estado social de derecho como Colombia, donde quienes lo integran deben tener certeza sobre las consecuencias de sus actos, el sentido de la reparación es importante; de un lado, para quien sufre un daño y le debe ser reparado, y de otro, para quien tiene el deber de repararlo⁴⁷.

Por último es importante mencionar como al cabo de estas dos décadas se han realizado esfuerzos por parte de diferentes gobiernos para reglamentar los procesos de paz y desmovilización con agrupaciones paramilitares y guerrilleras, sin embargo es de anotar, como ha existido una lucha constante por parte de la población rural para que les sea reconocido su condición de víctimas y en consecuencia, que puedan ser reparadas adecuadamente, es decir que es obligación del Estado, resarcir los daños morales, emocionales, físicos y materiales que han recibido los ciudadanos que han estado en medio del conflicto armado. Fruto de estos esfuerzos es que se pueden mencionar leyes recientes como la 1448 de 2011 en materia de reparación de víctimas.

1.5. RECONOCIMIENTO DE UN CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.

Reconocer un conflicto armado interno, ha permitido al Estado Colombiano el direccionamiento de políticas públicas a fin de paliar sus consecuencias, en tal sentido Wiesner León indicó:

⁴⁷ MÁRQUEZ, Juliana Nanclares; GÓMEZ, Ariel Humberto Gómez. La reparación: una aproximación a su historia, presente y prospectivas. Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 2017, vol. 17, no 33, p. 59-79. [En Línea]. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/1002/100254730004.pdf>

*El análisis del conflicto armado colombiano presenta muchos desafíos, ya que el conflicto ha permeado todos y cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana de los habitantes del territorio, incluyendo, por supuesto, la actividad empresarial. Sin embargo, como es ya conocido, una de las motivaciones de los actores del conflicto, en sus inicios, fue la inequitativa distribución de la tierra, lo cual derivó en la creación de diferentes grupos armados que buscaban reivindicar los derechos del campesinado*⁴⁸.

Así, en su artículo 3º, la ley 1448 de 2011 (víctimas y restitución de tierras), parte del reconocimiento del conflicto armado en Colombia y establece una definición amplia de víctima, indicando:

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

La reparación colectiva que presenta la ley general de víctimas⁴⁹ no es una novedad, pues, la Ley 975 de 2005 innovó al establecer la reparación colectiva a partir del reconocimiento de un daño colectivo. Sin embargo, para ese momento la figura no se diseñó de manera adecuada, debido a que no presentó una definición de lo que ha de entenderse por daño colectivo o se marcó claramente su distinción del daño individual⁵⁰

⁴⁸ WIESNER León, Héctor. Capítulo II. “La actividad empresarial en los conflictos armados y su influencia en los Derechos Humanos: comentarios al caso colombiano”. En: Derechos humanos y la actividad empresarial en Colombia: implicaciones para el estado social de derecho / Julián Tole Martínez, editor; Antonio Moreira Maués [y otros]. – Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2019. p. 454.

⁴⁹ Ley 1448 de 2011. (Víctimas y Restitución de Tierras)

⁵⁰ AGUDELO, G. D., & Walker, C. A. (2010). Ley de justicia y paz, un balance de su primer lustro. Universidad de Antioquia.

Así mismo, en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, éstos últimos, específicos para las comunidades y pueblos étnicos, existe un conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocasionadas por el conflicto armado interno del país. En ese marco normativo, se evidenció la imposibilidad del goce efectivo de los derechos de la población víctima a mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, reconociendo en el mismo su condición de población vulnerable y, procuró dignificarlas a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

La ley 1448 de 2011 dio origen a tres organismos estatales que cuentan con una finalidad específica en procura de garantizar los derechos de las víctimas y su inclusión social, ellos son:

- i) La Unidad de Restitución de Tierras, encargada de las medidas de restitución de tierras a las víctimas de despojo y desplazamiento, dicha actividad hace parte del componente de reparación integral.
- ii) El Centro Nacional de Memoria Histórica, quien es responsable respecto de las medidas de satisfacción y reparación colectiva, igualmente hace parte del componente de reparación integral, y cuya finalidad radica en promover procesos de reconstrucción colectiva de la memoria junto a las víctimas.
- iii) Y finalmente tenemos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas⁵¹, entidad encargada de realizar el Registro Único de

⁵¹ La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia es una institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/11) aprobada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La Unidad para las Víctimas busca el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación. En atención

Víctimas (RUV), y de tomar las medidas de atención humanitaria dentro del componente de atención y asistencia, implementar las cinco medidas de reparación, entre ellas, la indemnización administrativa, los retornos y reubicaciones dentro del componente de reparación integral, el desarrollo del eje de la participación efectiva de las víctimas; y el eje de articulación del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otras.

Como pudo observarse solo a inicios de la última década se legisló alrededor de la conceptualización de a quién se concibe como víctima y de las dificultades para dar razones sobre reparar a las víctimas de manera colectiva, entendiendo que las comunidades establecen relaciones especiales con su territorio y con las demás personas que viven en su vecindario, además, comprendiendo que la guerra genera impactos psicológicos entre quienes sufren las confrontaciones entre actores armados, incluyendo la persecución, las amenazas, el temor a la muerte, etc, cuestiones que requieren ser atendidas, para lograr parte de la reparación colectiva de las víctimas. Además, de que el conflicto afecta de manera global el estilo de vida quienes están en medio de la guerra, esto hace parte de las afectaciones colectivas que en su momento fueron difíciles de adaptar o conceptualizar dentro de las leyes mencionadas anteriormente.

1.6. LA REPARACIÓN COLECTIVA Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL.

Cabe mencionar que, el marco teórico y conceptual de la reparación colectiva está inmerso en la justicia transicional, entendida esta última como la noción de derecho y justicia en relación con los estándares internacionales frente a la violación de derechos humanos⁵². Así mismo, se concibe a la justicia transicional como la justicia

a ese mandato, se encarga de coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado; entregar la ayuda humanitaria a quienes por el hecho victimizante la requieran inmediatamente y articular a las entidades que forman parte Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV. Es una entidad del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por Prosperidad Social. [En Línea]. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_para_la_Atenci%C3%B3n_y_Reparaci%C3%B3n_Integral_a_las_V%C3%ADctimas

⁵² VALDERRAMA-BEDOYA, Francisco Javier; ORTIZ-AGUDELO, Marvin Octavio. Justicia transicional: Noción de la justicia en la transición colombiana. Revista Opinión Jurídica, 2017, vol. 16, No 32, p. 245-266. p. 247.

asociada al contexto y a las circunstancias políticas, donde el ideal universal de justicia debe ser desestimado para lograr el fin social de transitar hacia un sistema más liberal y democrático. Es decir que la justicia transicional es un producto del voluntarismo político como resultado de un acuerdo que las fuerzas sociales obtienen, con el fin de dar transición del conflicto armado a un proceso de paz⁵³.

En tal sentido Valderrama-Bedoya, citando a Teitel expresó:

La profesora Ruti Teitel (2000) concibe la justicia transicional como la justicia asociada al contexto y a las circunstancias políticas, donde el ideal universal de justicia debe ser desestimado para lograr el fin social de transitar hacia un sistema más liberal democrático. Entiende la profesora argentina la justicia transicional como un producto del voluntarismo político, como aquel resultado del acuerdo que las fuerzas sociales alcanzan para transitar del conflicto a la paz. Se vislumbra en esta posición concordancia con algunas de las concepciones de lo justo expuestas en el capítulo pretérito, al construir el significado de la justicia como la convención que resulta de las voluntades humanas.⁵⁴

Igualmente, Valencia Villa ha entendido a la justicia transicional así:

¿Qué es la justicia transicional? Bajo este neologismo tomado de la lengua inglesa se conoce hoy todo el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles

⁵³ LÓPEZ, R. E (2015). The collection of memory after mass atrocity and the dilemma for transitional justice. International law and politics, 47, 799- 853.

⁵⁴ VALDERRAMA-BEDOYA, F. J., & Ortiz-Agudelo, M. O. (2017). Justicia transicional: Noción de la justicia en la transición colombiana. Revista Opinión Jurídica, 16(32), 245-266. P. 12. [En Línea]. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v16n32/1692-2530-ojum-16-32-00245.pdf> en cita de: Teitel, Ruti, Transitional Justice. Oxford University Press. 2000.

y otras crisis de amplio espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad democrática. En el texto analítico más importante que se ha publicado en este campo durante las últimas décadas, el sociólogo noruego Jon Elster afirma que “la justicia transicional está compuesta de los procesos penales, de depuración y de reparación que tienen lugar después de la transición de un régimen político a otro” y agrega, en lo que él mismo llama “la ley de la justicia transicional”, que “la intensidad de la demanda de retribución disminuye con el intervalo de tiempo entre las atrocidades y la transición, y entre la transición y los procesos judiciales”⁵⁵

En consecuencia, se puede entender dicha justicia transicional como el conjunto de decisiones y mecanismos destinados a impartir justicia en procesos de cambios democráticos y políticos, su objetivo es ofrecer soluciones adecuadas a la realidad social en tránsito para reparar de forma justa a las víctimas. Esto, a causa de la acción/represión de un Estado democrático el cual presenta tensiones de grupos al margen de la ley en el territorio de arraigo de la población, convirtiendo así la política de justicia transicional un factor que influye en el desarrollo del proceso de cambio político⁵⁶.

La justicia transicional empezó a ser entendida en el período de la posguerra después de 1945, seguido de la ola de transiciones hacia la democracia y modernización que comenzó en 1989. Hacia finales del siglo XX, las dinámicas políticas y sociales empezaron a tener diferentes cambios y aceleraciones en la resolución de los conflictos en la que persiste un discurso por la justicia en el mundo del derecho y en la sociedad. Por último, la tercera fase está asociada a las condiciones contemporáneas de conflictos internos de cada sociedad⁵⁷.

⁵⁵ VILLA, Hernando Valencia; JOINET, Louis. Introducción a la justicia transicional. Claves de razón práctica, 2008, vol. 180, p. 76-82. p. 1.

⁵⁶ PERÉZ, Jordi. Bonet., & Fernández, Rosa. Ana Alija. (2009). Impunidad, Derechos humanos y Justicia transicional. Universidad de Deusto. 2009. p.12. [En Línea]. Recuperado de <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho53.pdf>

⁵⁷ TEITEL, Ruti. Genealogía de la justicia transicional. Harvard Human Rights Journal, 2003, vol. 16, p. 69-94. p. 70.

De acuerdo con lo anterior, la historia ha cerrado diferentes procesos políticos, sociales y democráticos de los cuales han surgido nociones sobre la justicia transicional. Desde 1919 con el Tratado de Versalles⁵⁸ surge la génesis de la transicionalidad evidenciando allí un proceso de paz en dónde se pone fin oficialmente a la primera guerra mundial. Es entonces, en 1920, cuando entró en vigor el tratado de paz con las reparaciones económicas y políticas que realizó Alemania por su responsabilidad moral y material por haber causado la guerra.

Dicha “sanción” fue dirigida desde el ámbito internacional, determinando los diferentes asuntos por los cuales Alemania debía indemnizar, a causa de los daños ocasionados; es justo en este momento donde surge el primer escenario de la justicia transicional, en el cual se evidencian discusiones enmarcadas hacia los tipos de sanciones, sean estas locales o internacionales, individuales o de forma colectiva, es entonces, y solo entonces, cuando el tratado de Versalles trae consigo una respuesta a una reparación internacional. Sin embargo, en el periodo de posguerras, surgió la discusión en torno a los procesos de justicia nacional con el propósito de reconstruir a las naciones y formar nuevos procesos políticos, sociales, económicos y culturales en aras de reparar la memoria y verdad de las víctimas de la guerra mediante comisiones asignadas por la justicia nacional.

Así mismo, a inicios de la década de 1980, los países de América Latina experimentaron diversos procesos de transformación política debido a las confrontaciones armadas sufridas en toda la región; es por ello, por lo que América Latina también puede considerarse poseedora de una tradición en materia de verdad y memoria mediante experiencias pioneras en la búsqueda de justicia en los procesos de restauración de la democracia o de la paz⁵⁹.

⁵⁸ El Tratado de Versalles, en su Artículo 231, establece que: “*Los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce, que Alemania y sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todos los daños y pérdidas infligidos a los gobiernos aliados y asociados y sus súbditos a consecuencia de la guerra que les fue impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados*”. Véase Tratado de Versalles, 28 de junio de 1919, Artículo 231, Parte VIII, Consol. T.S. 225; véase en general Nana Sagi, *German Reparations: A History of the Negotiations* (Dafna Alon trans., 1980).

⁵⁹ BEDOYA, F. J., & Agudelo, M. O. (2017). Justicia transicional: Nación de justicia en la transición colombiana. *Opinión Jurídica*, Universidad de Medellín, 245-266.

*Encontramos entonces que la justicia transicional presenta dos dimensiones, una de carácter judicial que privilegia la investigación de los hechos ocurridos y la imputación de responsabilidades a los perpetradores y una dimensión política que integra una serie de procesos que conducen a la transformación social e institucional de los Estados*⁶⁰

Otra definición de la justicia transicional la advertimos del propio centro internacional para la justicia transicional, que al respecto la concibe como:

*Una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada de los derechos humanos*⁶¹

La justicia transicional, adopta entonces esquemas jurídicos ordinarios a situaciones excepcionales teniendo como fin la paz, la estabilidad política y la consolidación de sociedades democráticas a través de mecanismos inmersos como:

- i) La investigación de los hechos de violaciones de derechos humanos ocurridos en periodos de violencia, destinados específicamente a la construcción de la memoria histórica,⁶² este proceso tiene una relación directa con el derecho a la verdad como un derecho individual y colectivo.

⁶⁰ ORTEGA-HERNÁNDEZ, Mary Cruz; SAYAS-CONTRERAS, Rafaela. El concepto de reparación colectiva en el marco de la justicia transicional. *Vis Iuris. Revista de derecho y ciencias sociales*, 2015, p. 37-54. p.39.

⁶¹ COLOMBIA. Centro Internacional para la Justicia Transicional (2009). [En Línea]. Recuperado de <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf>

⁶² MEMORIA HISTÓRICA: Es entendida como un proceso participativo en el que los directamente involucrados narran lo sucedido y el Estado tiene el deber de promover esas narraciones, conservar dicha memoria colectiva y dar a conocer lo sucedido.

- ii) La persecución y sanción, la cual implica establecer instrumentos jurídicos alternativos para la judicialización de violación de derechos humanos.
- iii) La reparación, la cual implica la aplicación de mecanismos judiciales y administrativos para la satisfacción, restitución, indemnización y rehabilitación de los derechos de las víctimas.

Adicionalmente, Brito Ruiz presenta el proceso de justicia transicional con un enfoque restaurativo dado que debe constar de cuatro niveles, el primero está relacionado con el derecho a la verdad de las víctimas mediante comisiones de verdad y reconstrucción de la memoria histórica; el segundo nivel tiene que ver con el derecho a la justicia y comprender desarrollos jurídicos que garantizan la inexistencia de la impunidad⁶³. Un tercer nivel está relacionado con el derecho de reparación material y simbólica, y un último nivel se encuentra enfocado a las garantías de no repetición las cuales implican cambios culturales en la sociedad⁶⁴.

Teniendo en cuenta este marco conceptual, es importante destacar que en Colombia la justicia transicional en el propio Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera⁶⁵ insiste en que:

(...) el Sistema pretende ser integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto” (AF, p. 127).

⁶³ PÉREZ, Jordi Bonet; FERNÁNDEZ, Rosa Ana Alija. Impunidad, derechos humanos y justicia transicional. Universidad de Deusto, 2009.

⁶⁴ BRITTO RUIZ, Diana, (2010). Justicia Restaurativa. Reflexiones sobre la experiencia en Colombia. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, p. 71.

⁶⁵ LA PAZ, Alto Comisionado Para. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Bogotá DC, Colombia. Obtenido de <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>, 2016.

Para cumplir este objetivo, el Sistema prevé la combinación de mecanismos judiciales (JEP) y extrajudiciales (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición) (AF, p. 127).

Lo anterior, ha mostrado como ha sido el desarrollo de la justicia transicional y su importancia desde el ámbito internacional como quedó esbozado en los conflictos del siglo XX como las guerras mundiales y desde allí, se sembró el precedente para la adecuada reparación de las víctimas como un paso hacia la consolidación de la paz. En el caso colombiano, se recalca el compromiso tanto del Estado como de las Farc para poner fin a un conflicto de más de cincuenta años, donde fue necesario legislar sobre la reparación de las víctimas, juzgar y señalar a los responsables de los delitos atroces, la apertura para la participación política de la extinta guerrilla y la generación de planes de inversión social que permitan la correcta reinserción de los excombatientes a la sociedad. Todas estas cuestiones son manifestaciones de cambio del conflicto hacia otras manifestaciones democráticas que benefician al Estado y a la sociedad, especialmente a las comunidades rurales que son más vulnerables a las acciones del conflicto armado.

1.7. EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición fue incorporado en la Constitución Política de Colombia mediante el Acto Legislativo 01 de 2016⁶⁶. De igual forma, cada uno de sus componentes cuenta con su marco normativo. El Sistema enfatiza en la implementación de medidas restaurativas y reparadoras para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado y propiciar la

⁶⁶ DURAN CORTES, Yenid Lucela, et al. ¿Cuál es el alcance jurídico de los criterios de conexidad y de carga argumentativa, que se han establecido por parte de la Corte Constitucional, en lo que refiere a la interpretación del Acto Legislativo 01 de 2016 y el Fast Track?. 2017. p. 4.

transformación de los factores que incidieron en él como fundamentos de una convivencia pacífica y digna para las víctimas⁶⁷.

Es por esto que la Comisión de la verdad busca esclarecer lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno, a más de contribuir en aclarar las violaciones cometidas en el mismo y ofrecer a la sociedad una explicación amplia de su complejidad y un relato que recoja todas las voces. La Comisión promueve además el reconocimiento del derecho a la verdad de las víctimas y el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto. También promueve la convivencia en los territorios teniendo como horizonte la no repetición⁶⁸.

Por lo anterior, se consolidó la JEP⁶⁹ con el fin de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016. Investiga y juzga de forma obligatoria a excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública que hayan sido procesados o vinculados a delitos relacionados con el conflicto armado. También a otros agentes del Estado no militares y terceros civiles, que comparezcan de forma voluntaria⁷⁰.

⁶⁷ CAMARGO, Sergio Roberto Matias. La Justicia Especial para la Paz (JEP), sus avances y sus obstáculos. Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales, 2019, no 50, p. 27-37. p. 30.

⁶⁸ CALLE MEZA, Melba Luz; IBARRA PADILLA, Adelaida María. Jurisdicción Especial para la Paz: fundamentos teóricos y características de la justicia transicional en Colombia. Análisis Político, 2019, vol. 32, no 96, p. 3-20. p. 10.

⁶⁹ LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP), también conocida como Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado interno en Colombia. Su presidente es la abogada Patricia Linares, designada en septiembre de 2017 por el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición. La JEP, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,³ está vigente en Colombia desde marzo de 2017 cuando fue aprobado en el Senado y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016. Su creación fue pactada en el marco de los Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP como sistema de rendición de cuentas con el objetivo principalmente de satisfacer los derechos de las víctimas, con la tarea de esclarecer “en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos” para poner punto final a más de medio siglo de conflicto armado. En este acuerdo se acepta que hay delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado que son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos, y que la transición del conflicto armado a la paz en Colombia se hará garantizando el derecho de las víctimas a la justicia. [En Línea]. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n_Especial_de_Paz.

⁷⁰ MESA, Jaime Alberto Sandoval; SIERRA, Carlos Alberto Cárdenas. Los principios de la justicia especial para la paz en los acuerdos suscritos con las FARC en Colombia y su relación con la Comisión de la Verdad. Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, 2020, vol. 8, no 15, p. 71-91. p. 78.

Es por esto, que el sistema de reparación de las víctimas debe establecerse de manera independiente de las responsabilidades. Se busca como tal que las víctimas sean reconocidas, sus derechos sean restablecidos y reparados. Con la aprobación de la Resolución 60/147 ONU⁷¹, se reconocieron como formas de reparación, la indemnización, las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.

Como parte de las negociaciones, la Ley 1820 de 2016⁷², fue creada para regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos para excombatientes guerrilleros que hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno nacional y hayan dejado las armas, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados para Agentes del Estado y terceros civiles⁷³, cumpliendo así el marco del Acto Legislativo número 01 de 2016⁷⁴.

Así las cosas, las amnistías son, entonces, medidas compatibles, prima facie, con el Derecho Internacional Humanitario, específicamente, en los conflictos no internacionales, pues persiguen que las personas que participaron en la confrontación no sean castigadas por el solo hecho de portar las armas, lo que haría muy difícil el proceso de reconciliación⁷⁵.

El principal requisito para acceder a la amnistía o indulto es la dejación de las armas. Por ello, la Sala de Amnistías e Indultos de la JEP “podrán revocar esta amnistía a

⁷¹ Resolución 60/147 de la Asamblea General ONU. (principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones). Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.

⁷² LEY 1820 DE 2016. (diciembre 30). Diario Oficial No. 50.102 de 30 de diciembre de 2016. *“Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”*.

⁷³ AMBOS, kai. la Ley de Amnistía (ley 1820 de 2016) y el marco jurídico internacional. pp. p.130.

⁷⁴ ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2016. (julio 7). Diario Oficial No. 49.927 de 7 de julio de 2016. *“Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”*.

⁷⁵ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-007 (1 de marzo de 2018). M.P. Dra. FAJARDO RIVERA, Diana.

solicitud de cualquier autoridad cuando se haya constatado que la persona volvió a delinquir con posterioridad a la firma del Acuerdo Final”⁷⁶.

Son varios los delitos que van a hacer objeto de amnistía o indultos, es decir, son delitos cometidos durante el conflicto armado, pero no van a hacer objeto de investigación y juzgamiento por la jurisdicción JEP. La Ley 1820 de 2016 respeta todos los parámetros internacionales y para eso se tomaron tres diferentes apartados de su aplicabilidad:

1. Amnistía de iure para delitos políticos y conexos. Se ocupa de los delitos que siempre son objeto de amnistía o de indulto, contiene los delitos políticos tradicionales como rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Y los delitos conexos con los delitos políticos que no tienen una discusión a nivel internacional sobre su conexidad como: a. Los delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares. b. Los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, como por ejemplo la obtención de cédula de ciudadanía falsa, la violación ilícita de correspondencia o el espionaje. c. Las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. d. Uso indebido de armas, o de uniformes y de equipos de radiocomunicación de uso privativo de las fuerzas armadas. (Ministerio de Justicia de Colombia).
2. Delitos excluidos de amnistías e indultos. Es la enumeración de los delitos que en ningún caso pueden ser de amnistía o indultos y la enumeración coincide con la que se ha hecho desde el punto de vista

⁷⁶COLOMBIA. Ministerio de Justicia y del Derecho. ABC LEY DE AMNISTÍA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES. [En Línea]. Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdf/ABC%20amnistia.pdf>

internacional, no hay ningún delito que a nivel internacional tenga prohibida la amnistía que vaya a recibir amnistía en la ley colombiana. Dentro de los delitos excluidos de amnistía e indultos se tienen los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Tampoco serán objeto de amnistía ni indulto los delitos comunes que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal propio o para un tercero. (Ministerio de Justicia de Colombia).

3. Delitos que requieren una decisión caso a caso: Para la aplicación de la amnistía, existen delitos respecto de los cuales hay siempre discusión, sobre si son conexos o no, ya que esa conexidad depende de la forma concreta en que el caso o que el delito haya ocurrido. Por ejemplo, el homicidio, puede o no ser conexo con el delito político, dependiendo de la forma en que ocurrió, si fue en desarrollo de un combate, si con respeto a las reglas de Derecho Internacional Humanitario se pueda considerar conexo con el delito político, depende realmente de las particularidades de cada caso en concreto.

En el proceso de justicia transicional en Colombia, es fundamental realizar un trabajo sincronizado entre instituciones responsables de la defensa de los derechos humanos⁷⁷, así como apoyarse en el Derecho Internacional Humanitario (DIH)⁷⁸, lo anterior, tal como lo dispone la Ley 1448 de 2011 (Víctimas y Restitución de Tierras),

⁷⁷ DELGADO, Carlos Felipe Rúa. Los momentos de la justicia transicional en Colombia. Revista de Derecho, 2015, no 43, p. 71-109. P.76

⁷⁸ HERRERA KIT, Patricia; TAYLOR, Stephanie. El Sistema Nacional De Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario: ¿Una Nueva Etapa En La Actuación En Materia De Derechos Humanos En Colombia? (The National System of Human Rights and Humanitarian International Law: A New Stage in the Action for Human Rights in Colombia?). The National System of Human Rights and Humanitarian International Law: A New Stage in the Action for Human Rights in Colombia, 2014. p.67.

y su Decreto reglamentario, y demás instrumentos del derecho internacional e interno, porque más que transformaciones, lo que se requiere es ejecutar las herramientas disponibles con las que se cuentan para dicho proceso; es por ello que tanto las Personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el ICBF, y las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpos de seguridad estatal, Fiscalía, entes territoriales y demás relacionados directa e indirectamente con la defensa de derechos humanos en Colombia, deben armonizar con la Unidad para las Víctimas, que mediante su grupo de garantías de no repetición establece lineamientos para el diseño, formulación, gestión y socialización de las Garantías de No Repetición, en su dimensión preventiva y reparadora⁷⁹; inclusión de acciones para la reconciliación, a través de la herramienta Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional y garantías colectivas dirigidas a la sociedad, que tiendan a deconstruir los patrones culturales y que minimicen la reproducción de hechos victimizantes e implementar medidas con enfoque de reconciliación dentro de los procesos de reintegración y reparación⁸⁰.

Si bien la justicia transicional puede encontrar elementos que determinan un proceso de justicia y verdad⁸¹, teniendo en cuenta que este último destaca en los individuos y colectivos sus situaciones propias y particulares que vivieron en el territorio en el marco del conflicto armado, al respecto Rodríguez y Estrada⁸² han mencionado cómo para la historia colombiana se ha convertido en un reto el esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco de la justicia transicional.

⁷⁹ GUEVARA RODRÍGUEZ, Javier Camilo. Una aproximación a las garantías de no repetición de la ley 1448 de 2011 a la luz del "ideal común" sobre ciudades y asentamientos humanos estipulado en la nueva agenda urbana-hábitat III 2016. 2018. p. 39.

⁸⁰ CALDERÓN, Daniel Pardo; SALAZAR, J. D.; PARA LA PAZ, Fundación Ideas. Reintegración: Reconciliación y Desarrollo desde los Territorios. Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 2015, vol. 41. p.15.

⁸¹ UPRIMNY, Rodrigo; SAFFON, María Paula. Capítulo 7 Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades. Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional, 2005, vol. 211. p. 214.

⁸² Pulido, C. B., Gallego, F. E., Rodríguez, J. C., González, E. S., Díaz, R. E. S., Chávez, E. V., ... & Henao, M. C. (2017). Justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Universidad Externado. Capítulo 2. p. 135.

En conclusión, cabe resaltar como la aplicación de la justicia transicional en Colombia ha requerido de diversos esfuerzos en materia legislativa, para regular todos los elementos relacionados con la justicia, la verdad, la reparación efectiva de las víctimas y el compromiso de no repetición, además de la construcción de una memoria histórica que le permita al país que ha sucedido en relación a los actos propios del conflicto, así mismo, de la clasificación entre los delitos susceptibles de ser amnistiados y aquellos que deben ser juzgados de manera diferente por ser considerados de lesa humanidad. Así mismo, vale recalcar que el proceso llevado a cabo por Colombia ha contado con el apoyo de la comunidad internacional y se ha basado en las normas internacionales como las del DIH, el Estatuto de Roma y aquellas creadas por las Naciones Unidas.

1.8. SUJETOS INDIVIDUALES Y SUJETOS COLECTIVOS.

Teniendo en cuenta lo anterior, las diferentes manifestaciones y realidades del país ha demostrado que existen sujetos que sufren daños y que afectan no solo a los individuos por separado sino a los grupos y comunidades⁸³. Por esto, es necesario establecer mecanismos que satisfagan los derechos a la indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para las comunidades y colectivos que se ha visto afectada por una serie de violaciones, por lo que permite desarrollar herramientas para la reparación colectiva⁸⁴.

1.9 ATRIBUTOS DEL PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA.

De acuerdo con lo anterior, la Unidad para las Víctimas, por mandato del artículo 151 de la Ley 1448 del 2011 se le impone que implemente un programa de reparación colectiva que tenga en cuenta con alguno de los siguientes eventos:

⁸³ DE MEMORIA HISTÓRICA, GMH-Grupo. Centro Nacional de Memoria Histórica. DAÑOS: análisis de los impactos del conflicto armado colombiano. Bogotá, Colombia, 2008. p. 16.

⁸⁴ GONZÁLEZ, Angélica María Anichiarico. Una visión de la terminación de los conflictos armados centrada en la justicia transicional. UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política, 2016, p. 165-194. p. 172.

- a) El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos;
- b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos;
- c) El impacto colectivo de la violación de derechos individuales

Y el decreto 1084 de 2015 define la reparación colectiva como:

ARTÍCULO 2.2.7.8.1 Reparación colectiva. Entiéndase por reparación colectiva el conjunto de medidas a que tienen derecho los sujetos colectivos que hayan sufrido alguno de los eventos definidos en el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, las cuales comprenderán medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico.

La reparación colectiva estará dirigida al reconocimiento y dignificación de los sujetos de reparación colectiva, la recuperación psicosocial, a la inclusión ciudadana como sujetos plenos de derecho, a la reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción de confianza de la sociedad en el Estado en las zonas y territorios afectados por el conflicto armado, a la recuperación y/o fortalecimiento de la institucionalidad del Estado Social de Derecho para la consecución de la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.⁸⁵

Y dando alcance a esta definición, mediante la Resolución 3143 de 2018 expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se definió el concepto de reparación colectiva así:

⁸⁵ Definición de Reparación Colectiva contenida en el Decreto 1084 de 2015 “ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación”

El Programa de Reparación Colectiva tiene como objetivo general contribuir a la reparación de los daños colectivos ocasionados en el marco del conflicto armado a los Sujetos de Reparación Colectiva desde una perspectiva material, política y simbólica, a través de las siguientes acciones específicas:

- *Reconstruir los proyectos colectivos, planes de vida, proyectos de etnodesarrollo y planes de largo y buen camino de los Sujetos de Reparación Colectiva.*

- *Recuperar y restablecer el tejido social y las relaciones de confianza en los Sujetos de Reparación Colectiva.*

- *Dignificar y recuperar la memoria histórica en los Sujetos de Reparación Colectiva.*

- *Fortalecer las capacidades políticas, ciudadanas y de incidencia institucional, territorial y nacional de los Sujetos de Reparación Colectiva.*

- *Acompañar a las autoridades locales en la instauración de nuevas relaciones de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado, que faciliten la implementación del Programa de Reparación Colectiva.*

- *Promover la reconciliación y los pactos de convivencia, tanto al interior, como con el entorno de los Sujetos de Reparación Colectiva.*

Como lo menciona el objetivo general, el Programa de Reparación Colectiva debe ser comprendido desde la implementación de acciones dirigidas a tres componentes: el político, el material y el simbólico⁸⁶.

De acuerdo con esta investigación se hará una conceptualización sobre la reparación colectiva como también se identificará los elementos principales del modo de dicha reparación utilizada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.

La reparación colectiva no es solo simbólica, también tiene representación material, destinados a un grupo determinado, Ochoa frente a los sujetos colectivos indicó:⁸⁷

El caso colombiano es en la categoría de análisis presente la definición más precisa de los casos estudiados y se establecen como sujetos a “los grupos y organizaciones sociales y políticos, así como comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común”. Todas estas que hayan pasado por los hechos victimizantes como “a. El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; b. La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos; c. El impacto colectivo de la violación de derechos individuales”. Esta conceptualización del sujeto de reparación colectiva parte de las experiencias adquiridas por la ya extinta CNRR, que establece tanto a los sujetos como los niveles de impacto para que sean reconocidos como sujetos de reparación colectiva.

1.10 ELEMENTOS DE LA REPARACIÓN COLECTIVA

⁸⁶ Resolución 3143 de 2018 – Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

⁸⁷ OCHOA OCHOA, Bruce David. La Reparación Colectiva como facilitadora de procesos de cohesión social: Una mirada a los procesos de postconflicto latinoamericanos. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), 2015. p. 108.

De estas definiciones, se pueden observar tres elementos respecto de la reparación colectiva: los bienes objeto de la reparación, el sujeto beneficiario, y el contenido material y simbólico.

En conclusión, el establecimiento de un concepto de reparación colectiva ha sido clave frente al tratamiento del proceso de justicia transicional, en el sentido de que pone las bases sobre lo que se debe hacer frente a las colectividades que han padecido los efectos de la guerra, saliendo del terreno meramente simbólico y del acceso a la verdad sobre los hechos de guerra, porque esto también obliga al Estado a ofrecer proyectos y mecanismos que permitan a las comunidades reconstruir su tejido social y restablecer en la medida de lo posible, el estilo de vida que tenían las comunidades afectadas por la violencia armada.

1.11 LA REPARACIÓN COLECTIVA EN EL DERECHO COMPARADO.

A nivel internacional, se ha encontrado que la reparación colectiva tiende a convertirse en una herramienta que no pretende otra cosa que organizar los recursos para los casos de la reparación a víctimas como grupo sin tener en cuenta los daños sufridos por las colectividades por hechos victimizantes sufridos en un conflicto. Al respecto Díaz precisó:⁸⁸

De manera creciente, en distintos escenarios de justicia transicional alrededor del mundo se está discutiendo la formulación e implementación de reparaciones colectivas para comunidades enteras que sufrieron a causa de la represión política y la guerra. Las comisiones de la verdad de Guatemala (1997-1999), Perú (2001-2003), Timor Oriental (2001-2005), Sierra Leona (2002-2005), Marruecos (2004-2006), y Liberia (2006-2009) recomendaron la adopción de medidas de reparación

⁸⁸ DÍAZ, Catalina. La reparación colectiva: problemas conceptuales en perspectiva comparada. Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión, 2009. p. 145-146. [En Línea]. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/Reparar-en-Colombia.pdf>

colectiva dirigidas a comunidades, pueblos y grupos de personas, además de medidas de reparación individual para los familiares de las personas asesinadas y desaparecidas y las víctimas sobrevivientes de lesiones físicas o psicológicas graves, torturas, violencia sexual y, en algunos casos, para niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado. Con el apoyo del Banco Mundial, en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno de Indonesia y el Movimiento por la Liberación de Ache (provincia de Indonesia) suscrito en Helsinki en 2005, se están financiando proyectos de desarrollo comunitario en función de la intensidad de los daños causados por el conflicto y el tamaño de la población. El reglamento interno de las salas especiales de las cortes de Camboya autoriza a los tribunales a ordenar reparaciones colectivas y morales a las víctimas del régimen del Khmer Rojo en ese país.

De acuerdo con lo anterior, es importante precisar quiénes son los sujetos colectivos,⁸⁹ por lo que se hacen referencia a un nuevo sujeto de derechos humanos que viene a superar su percepción individualista, este es el sujeto colectivo que frente a una violación de sus derechos deberá ser reparado. En tal sentido Ceballos precisó:⁹⁰

Los sujetos colectivos de derecho han ampliado el concepto de persona más allá de la definición clásica, que se sigue usando en la enseñanza y uso del derecho, sobre todo el concepto de persona natural, ya que por su naturaleza hay que ubicar a los sujetos colectivos dentro de esta categoría y no dentro de las personas jurídicas, con quienes no tienen ningún tipo de punto de encuentro.

⁸⁹ CEBALLOS ROSERO, Franco Alirio, et al. Otros sujetos de derecho o personas (?). Estudios Socio-Jurídicos, 2019, vol. 22, no 1, p. 321-351. “La jurisprudencia constitucional ha establecido la existencia de los sujetos colectivos de derechos desde el principio, a través de varias sentencias de revisión de tutela (T-428 de 1992, T-380 de 1993, T-001 de 1994, entre otras), en la que el alto tribunal afirma que las comunidades indígenas son sujetos colectivos de derecho y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos, sino derechos constitucionales fundamentales como la vida”. p.329.

⁹⁰ CEBALLOS ROSERO, Ibidem. p. 73

Adicionalmente se considera como un grupo de personas que dispone de una unidad de sentido conformada por cuatro atributos o características propias que la definen, esto es, tiene unas prácticas colectivas, unas formas de organización y relacionamiento, un proyecto colectivo, así como unas formas de autorreconocimiento y/o reconocimiento por terceros, las cuales existían y son constatables desde antes del escalonamiento del conflicto armado en determinado territorio del país⁹¹. Para el caso de las comunidades urbanas, rurales y étnicas, el modelo de Reparación Colectiva considera el atributo de territorio como una quinta característica de estos tipos de sujeto colectivo⁹².

Así mismo, para Chacón Belalcazar⁹³ los sujetos colectivos son:

los sujetos colectivos son aquellos grupos de individuos en los que los fines e intereses van más allá de los de cada uno de los individuos que conforman el sujeto colectivo. Se origina así una voluntad y un interés que nacen y se sustentan en la voluntad y el interés de los individuos que integran el grupo.

En resumen, la creación del concepto de sujeto colectivo que agrupa a un conjunto de personas con características e intereses similares que han sido víctimas de la violencia armada, ha sido una de las transformaciones más grandes que se viene presentando en materia de justicia, en el sentido de que permite un mayor reconocimiento de las comunidades como víctimas y genera una mayor responsabilidad del Estado frente a los derechos de dichas personas y crea un compromiso más fuerte frente a la reparación efectiva de los ciudadanos como comunidad como un sujeto de derecho.

⁹¹ COLOMBIA, O. I. M. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Modelo de Reparación Colectiva. 2020. p. 25

⁹² COLOMBIA, O. I. M. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Anexo Técnico. Resolución 3143 de 2018 del modelo de reparación colectiva p.4

⁹³ Chacón. Belalcazar, Á A. (2010). Alcances de la Reparación Colectiva. Colombia: Defensoría del Pueblo. p.11.

1.12 EL PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE REPARACIÓN COLECTIVA.

Por otro lado, se destaca en la Ley de Víctimas la creación del Programa Administrativo de Reparación Colectiva, desde el reconocimiento de los daños colectivos que fueron afectados principalmente a las comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron. Esto con el fin de contribuir a su reparación desde los componentes político⁹⁴, material⁹⁵ y simbólico⁹⁶, a través de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

El artículo 3 de la Resolución 03143⁹⁷ de 23 de julio de 2018, diferencia a los sujetos que son principalmente afectados en una colectividad, definiendo:

- a) **Comunidades:** se entenderán como el conjunto de personas que conviven en un mismo espacio geográfico, que puede ser rural o urbano, y construyen su identidad colectiva a partir del territorio, de las relaciones de parentesco, de una historia de convivencia y de elementos de cooperación y organización de orden económico, político, cultural y simbólico.

⁹⁴ El componente político comprende diferentes mecanismos y acciones tendientes al fortalecimiento de las condiciones ciudadanas que potencian la existencia de los sujetos de reparación colectiva como actores sociales y políticos en la construcción de la democracia y paz. Igualmente hacen parte de la construcción de los procesos organizativos y comunitarios para la reconstrucción de la confianza con el Estado.

⁹⁵ Este componente hace referencia al conjunto de bienes y servicios que se otorgan en el proceso de reparación colectiva a los sujetos afectados por el conflicto armado y contribuyen a resarcir los daños de conformidad con las medidas establecidas.

⁹⁶ El componente simbólico busca contribuir al restablecimiento de la dignificación de sus derechos constitucionales con el fin de desarrollar acciones de repercusión de la memoria histórica y al restablecimiento del tejido social.

⁹⁷ Resolución número 03143 de 2018, por la cual se adopta el modelo operativo de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Diario oficial del 12 de sept. 2018.

- b) **Comunidad o pueblo étnico:** Se tendrá en cuenta lo establecido en los Decretos Ley 4633⁹⁸, 4634⁹⁹ y 4635¹⁰⁰ de 2011.
- c) **Grupos:** Se entenderá como el conjunto de personas u organizaciones que se han relacionado en razón a un proyecto colectivo, tienen un reconocimiento social y están dirigidos a la reivindicación de derechos humanos por los cuales se generaron procesos de estigmatización dentro de un territorio específico. El grupo no tiene una estructura organizacional formal, pero sí un reconocimiento social por la defensa de los derechos humanos.
- d) **Organizaciones:** Se entenderán como el conjunto de personas vinculadas entre sí a través de estatutos formales que tiene un objetivo común y consensuado, son reconocidos por este objetivo y sin ánimo de lucro. Cuenta con una estructura organizacional y con medios que les permiten desarrollar su objetivo, el cual se encuentra directamente relacionado con su proyecto colectivo y determina tanto sus prácticas colectivas, como sus formas de relacionamiento.

Así mismo, un documento técnico de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al respecto indica:

El programa de reparación colectiva, adicionalmente, implica un diálogo político entre la institucionalidad y la sociedad civil que conforman los sujetos de reparación colectiva en la perspectiva de recuperar niveles de

⁹⁸ DECRETO LEY 4633 DE 2011. (Diciembre 09). Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Diario Oficial 48278 de diciembre 9 de 2011.

⁹⁹ DECRETO 4634 DE 2011. (Diciembre 09). Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano. Diario Oficial No. 48.278 de 9 de diciembre de 2011.

¹⁰⁰ DECRETO-LEY 4635 DE 2011. (diciembre 9). Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Diario Oficial No. 48.278 de 9 de diciembre de 2011.

*confianza desde el diálogo ciudadano, alrededor de los hechos ocurridos, los daños colectivos y la reparación. De esta forma se fortalecen las capacidades políticas, ciudadanas y de gestión de los sujetos de reparación colectiva, contribuyendo a la reconciliación*¹⁰¹

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recalcar que el Modelo de Reparación colectiva¹⁰² desarrolla acciones en el marco de dos procesos de manera paralela y concertada con los sujetos de reparación colectiva. El primero se refiere al proceso de fortalecimiento de los sujetos de reparación colectiva en la cual pretende integrar todas las acciones que buscan aportar a la cualificación de sus habilidades:

- i. Fortalecimiento social y comunitario para la equidad,
- ii. Procesos comunicativos y,
- iii. Capacidades ciudadanas y políticas.

Mientras que el segundo proceso hace referencia a la gestión de la oferta por parte de la institucionalidad para la contribución a los derechos básicos del sujeto colectivo a partir de acciones que son fundamentales para el desarrollo del proceso de reparación colectiva en tanto representan condiciones para la garantía de los derechos constitucionales.

Por todo lo anterior, es importante mostrar los esfuerzos que se han realizado en el reconocimiento de las comunidades como víctimas del conflicto, comprendiendo que cada una tiene características diferentes, desde personas que comparten un mismo espacio geográfico, actividades económicas y comunales, así como grupos que tienen una relación étnica en el caso de indígenas, afros, rom, etc. Pero también

¹⁰¹ COLOMBIA, O. I. M. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Reparación Colectiva. ¿Qué es la reparación colectiva?

¹⁰²El Modelo de Reparación Colectiva es creado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

las comunidades que hacen parte de colectivos o movimientos con una organización clara. Caracterizar es importante para crear los proyectos necesarios y específicos que cumplan con las necesidades particulares de cada comunidad que ha sido víctima del conflicto en el país.

1.13. ATRIBUTOS DE SUJETOS COLECTIVOS.

Bajo este marco, un sujeto colectivo es un grupo de personas que cuentan con los siguientes atributos: autorreconocimiento y reconocimiento por terceros; proyecto colectivo; practicas colectivas; formas de organización y relacionamiento y el territorio. Ello se encuentra establecido en el artículo 2 de la Resolución 03143 del 23 de julio de 2018, así:

- a. Autorreconocimiento y/o reconocimiento por parte de terceros:** Hace relación a la forma como se vinculan y generan pertenencia los miembros del colectivo entre ellos y a las características que los identifica como colectivo frente a los demás.
- b. Proyecto colectivo:** Se entiende como aquellas razones y motivaciones que se proyectan en el tiempo, y que cuentan con unos medios (materiales e inmateriales) para llevarse a cabo.
- c. Prácticas colectivas:** Son aquellas actividades que son desarrolladas con frecuencia, tienen proyección de permanencia en el tiempo y reconocimiento mayoritario de los miembros del colectivo. Su desarrollo se encuentra relacionado con el proyecto colectivo.
- d. Formas de organización y relacionamiento:** Son los mecanismos que tiene el colectivo para la interacción entre sus miembros y con su entorno.

Estas permiten a los colectivos tejer sus lazos sociales y establecer relaciones de confianza.

- e. **Territorio:** Este atributo solo aplica para las comunidades étnicas y no étnicas. Hace referencia a las relaciones del colectivo con el espacio geográfico que ocupan, debe ser un espacio determinable con anterioridad a los hechos victimizantes y vigente en el presente del colectivo.

Lo anterior permite la caracterización de los tipos de comunidades que han sufrido la violencia en Colombia, conocer su composición es también una manera de exaltar su historia, conocer su estilo de vida y de manera particular entender cómo la guerra los ha afectado y de qué forma deben ser reparados por el Estado.

1.14. PRÁCTICAS COLECTIVAS DE SUJETOS COLECTIVOS.

Ahondando por cada atributo, se destaca que las **prácticas colectivas** están relacionadas por aquellas acciones que dan sentido y cohesión a la vida colectiva, en la medida en que:

- a. Son desarrolladas con cierta frecuencia o tienen proyección de permanencia.
- b. Tienen diferentes significados dentro del proceso histórico de construcción de identidad común.
- c. Para su desarrollo, requieren del reconocimiento mayoritario de los miembros del colectivo.

El desarrollo de este tipo de prácticas está relacionado con el **proyecto colectivo** y contribuye al proceso continuo de construcción de identidad cultural¹⁰³ mediante ejercicios de intercambio, participación, convivencia, incidencia ciudadana o exigibilidad de derechos. Estos ejercicios se realizan en escenarios de uso común por los miembros del sujeto colectivo, es decir, estas prácticas tienen sentido en la medida en que se desarrollan en los escenarios dispuestos para el encuentro del colectivo¹⁰⁴.

Las prácticas por identificar en el marco del Modelo de Reparación Colectiva son características que tienen los sujetos colectivos que se relacionan con algún oficio, ocupación artesanal o productiva, deportiva, religiosa o espiritual, de cura de prácticas ancestrales, asociadas a los roles e identidades de género, el ciclo vital o la pertenencia étnica, educativas, comunicativa, ambiental, artística, asociadas a la tradición oral, y de incidencia social y política.

El atributo de **formas de organización y de relacionamiento** se define como los medios y modos que tiene el colectivo para la interacción entre sus miembros y con su entorno político y social; da cuenta de aquellos elementos que les han permitido tejer sus lazos sociales y establecer relaciones de confianza. Estas formas de interacción tienen sentido en la medida en que se encuentran atados a sus prácticas colectivas y a su proyecto colectivo, integrando además el diálogo entre las diferencias que coexisten en el sujeto colectivo, sean estas de género, clase o grupo etario. Este atributo se define a partir de la identificación de los siguientes aspectos que determinan la relación tanto hacia el interior del colectivo, como fuera de éste, dando indicios sobre las formas en que el sujeto colectivo se organiza:

- a. La existencia de mecanismos de toma de decisiones colectivas.

¹⁰³ TORRES CARRILLO, Alfonso. Organizaciones populares, construcción de identidad y acción política. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2006, vol. 4, no 2, p. 167-199. p. 169

¹⁰⁴ GUTIÉRREZ TAMAYO, Alberto León. Ciudadanía y territorio: Escenario para la Formación Ciudadana. 2009. p. 114.

Ejercicios de toma de decisiones que integren, distribución de roles y tareas definidas por el sujeto colectivo para el cumplimiento del propósito común. Algunos ejemplos son:

- Asambleas comunitarias y populares.
- Consejos directivos.
- Círculo de la palabra.

b. La existencia de ejercicios de representatividad.

Acciones a través de las cuales el colectivo, elige a sus representantes y construye roles de representatividad, bien sea para su interlocución interna o con su entorno político y social.

Este elemento se puede rastrear a través de la presencia de:

- Mecanismos asamblearios de elección.
- Mecanismos de delegación por sector.
- Determinación de algunos miembros

Adicionalmente, es importante mencionar que mediante la resolución 03143 de 23 de julio de 2018 en su artículo 2 párrafo 2 menciona El hecho dañoso: el cual es producido por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado por los cuales:

- i. Se vulneraron derechos colectivos de estos sujetos.
- ii. Se llevaron a cabo violaciones graves y manifiestas de los derechos individuales de los miembros de los colectivos.

- iii. Se generó impacto colectivo como consecuencia de la violación de derechos individuales, deben tener afectación o impacto negativo sobre uno o varios de los atributos del colectivo.

Teniendo en cuenta las disposiciones de la resolución nombrada anteriormente, es importante identificar algunos derechos que fueron vulnerado y que bajo el Modelo de Reparación Colectiva se han tratado de solucionar:

- a. **Derechos de los Colectivos:** Los derechos de los colectivos que serán reparados mediante el Programa de Reparación Colectiva están relacionados directamente con uno o varios de sus atributos, en relación con los hechos vulnerados enunciados en la Resolución 03143 de 23 de julio de 2018.
- b. **Derechos Colectivos vulnerados:** Derecho a un proyecto de vida colectivo; Derecho a personería jurídica; Libertad de profesar y prácticas rituales o religiosas; Derecho al uso de su propia lengua; Libertad ideológica, religiosa y de culto; Derecho al Desarrollo (Art. 7, Convención 169); Derecho a los recursos naturales; Derecho a la paz; Derecho a la conservación del medio ambiente; Derecho a la educación (De acuerdo con su cultura); Derecho a la identidad cultural; Derecho a la autodeterminación; Derecho al buen nombre; Derecho a la igualdad; Prohibición de discriminación; Derecho a que se respeten sus propias instituciones, forma de vida y desarrollo económico; Derecho a que se respete su identidad, lengua y religión. (Convenio 169); Derecho al reconocimiento y protección de sus valores prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales (Convenio 169); Respeto a la integridad de los valores, practicas e instituciones de esos pueblos (Convenio 169); Derecho a la propiedad y posesión del territorio ancestral (Art. Convenio 169); Derecho a participar en la utilización, administración y conservación de recursos naturales (Convenio 169); Derecho a la verdad, justicia y reparación.

c. Derechos individuales (Violaciones graves y manifiestas que afectan uno o varios atributos): Derecho a un proyecto de vida individual; Derecho a la vida; Libertad personal; Libertad de circulación y residencia; Libertad de pensamiento, expresión e información; Derecho a la participación política; Libertad de oficio o profesión; Prohibición de Tratos crueles, degradantes e inhumanos.

d. Derechos individuales (por impacto a uno o varios atributos): Prohibición de ejecuciones arbitrarias; Perturbaciones arbitrarias – Derecho a la intimidad

Lo esbozado anteriormente es esencial para conocer cuáles son los derechos que son vulnerados dentro del contexto del conflicto armado en el país, es decir que hay una clara diferencia entre aquellos derechos que atañen a una persona como su vida o libertad y cuáles involucran a las comunidades como aquellos relacionados con la libre asociación, el uso de su lengua o el aprovechamiento de los recursos naturales.

Dar claridad sobre esto es determinante para que las autoridades analicen de manera concreta cómo fueron afectados los ciudadanos de forma individual y las comunidades de manera colectiva, lo que debe generar planes de acción más claros del Estado frente a la atención de las víctimas y sus necesidades, así como de la incidencia de los actores armados legales e ilegales en el estilo de vida de las víctimas.

A modo de conclusión de lo tratado hasta el momento, se puede afirmar que el desarrollo de la justicia transicional en Colombia ha sido un proceso donde ha sido necesaria la participación de diferentes actores políticos como el Gobierno Nacional, el Congreso, los organismos judiciales, entes de control, etc.,

Además fue muy importante y decisiva la voluntad de algunos de los actores involucrados, en este caso, el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, para lograr un acuerdo a fin de poner fin al conflicto armado que se ha venido desarrollando por más de cinco décadas, ello en atención a que lograron entender que la acción militar es un medio que no ha permitido mostrar un claro ganador y que por el contrario no solo generó un coste económico bastante alto, sino que a nivel social tuvo efectos devastadores, especialmente para las comunidades étnicas, rurales y campesinas, que han visto sus derechos vulnerados por acción de los distintos actores armados.

El desarrollo de la justicia transicional en los últimos años ha generado cambios en el país, sobre todo porque ha creado un capítulo especial para el reconocimiento y restablecimiento de los derechos de las víctimas, tanto de manera individual como colectiva, así mismo de generar el compromiso de los actores involucrados tanto legales como ilegales para comparecer ante la justicia especial para la paz, para dar testimonio sobre las motivaciones y los responsables de los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado.

Por ello, vale resaltar nuevamente el Acto legislativo 01 de 2016, como una herramienta central dentro del proceso de construcción de la justicia transicional y un paso importante para el esclarecimiento de los hechos de guerra y el acceso de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y a la no Repetición.

En la primera parte de este trabajo se hizo una aproximación sobre el conflicto armado colombiano, parte de su génesis, desarrollo y la conceptualización de los que ha sido la justicia transicional, su importancia y aplicación en el país, no obstante, también es relevante mencionar o entender de manera concreta cómo ha sido la experiencia de las víctimas o comunidades en la aplicación de dicha justicia, es decir, del análisis concreto de un caso como lo ha sido la comunidad de El Tigre, departamento del Putumayo, que permita reflexionar sobre los aciertos o retos que

tiene la aplicación de la justicia transicional en el país y del restablecimiento de los derechos individuales y colectivos.

2. VULNERACIÓN AL DAÑO COLECTIVO SUFRIDO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO Y EN EL PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL SUJETO “EL TIGRE”

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN.

A continuación, se contextualiza de forma cronológica y bajo una mirada crítica los hechos y las consecuencias que tuvo el incursionar paramilitar, más exactamente de miembros del Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas Unidas de Colombia—AUC, y que dio origen al daño¹⁰⁵ y futura reparación integral, como plan piloto, de la cual fue objeto el sujeto de reparación colectiva de la Inspección de Policía de El Tigre, en el bajo Putumayo (Valle del Guamuéz), por hechos acaecidos el día 9 de enero de 1999. Frente a la composición, tanto del territorio como de su población, Albarracín indicó:

El departamento del Putumayo se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia. Su población alcanza los 322.681 habitantes: 148.711 viven en zonas urbanas y 173.970 en zonas rurales. Cuenta con una población indígena de 51.700 personas, distribuidas en 12 pueblos étnicos y su territorio es de 24.885 Km². Limita al norte con Caquetá; por el oriente con Amazonas; al sur con las Repúblicas de Ecuador y Perú; y al occidente con los departamentos de Cauca y Nariño. Gran parte del Departamento está situado entre el Río Caquetá en el norte, y los Ríos Putumayo y San Miguel en el sur.

(...)

El Tigre es una de las seis inspecciones de policía que tiene el municipio Valle del Guamuéz, Putumayo. Está ubicada al nororiente de La Hormiga (cabecera municipal), a escasos treinta minutos (13

¹⁰⁵ Masacre de 28 individuos y más de 14 desaparecidos. (Todos Hombres).

Kilómetros) de ese lugar. Es un caserío que se levanta a la orilla de la carretera Pasto-Mocoa-La Hormiga-San Miguel-Ecuador, proyectada como “vía internacional”. Esto lo posiciona como corredor fronterizo que sale hacia Puerto Asís, San Miguel y Ecuador.¹⁰⁶

Geográficamente, se debe precisar que históricamente esta región de nuestro país, que comparte frontera con Perú y Ecuador, ha sido asolada por la violencia, algunos relatos de principios del siglo XX así lo indican, en tal sentido VALCÁRCEL, precisó:

Sumamente extraño parece, a primera vista, que en la región del Putumayo, perteneciente a un país civilizado como el Perú, se haya podido cometer, por tantos años, crímenes atroces sin que por acción del Gobierno de ese país se hubiese puesto término a la actividad criminal desarrollada en ella tan luego como principió a manifestarse; y por eso, creo necesario explicar por qué ha sido posible la perpetración de crímenes en aquella región aún después de haberse denunciado éstos por la prensa del Perú y ante el Poder Judicial de esa nación.

La región del Putumayo es la más apartada de la capital de la República del Perú, necesitándose 70 días para trasladarse a ella desde la capital antedicha por una de las vías que conducen al departamento de Loreto y 40 días por la otra.¹⁰⁷

CALDERÓN, reafirma este aspecto de explotación tanto de las riquezas naturales como de los nativos de la región quienes fueron llevados hasta la esclavitud, al expresar que:

¹⁰⁶ BELLO ALBARRACÍN, Martha Nubia; CANCEMANCE LÓPEZ, Jorge Andrés. La Masacre de El Tigre: 9 de enero de 1999. Reconstrucción de la Memoria Histórica en el Valle del Guamuéz, Putumayo. 2016. p. 14 y p. 22.

¹⁰⁷ VALCÁRCEL, Carlos A. El proceso del Putumayo y sus secretos inauditos. IWGIA, Vol. 1. 2004. p. 332

*Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (1880-1930), el boom de la explotación de gomas transformó espacial y poblacionalmente la Amazonía colombiana. El incremento y expansión de las actividades extractivas desde el piedemonte del Putumayo–Caquetá hasta las tierras bajas de la Amazonía, intensificó la explotación del trabajo indígena y los ritmos de los intercambios económicos. En el caso del Putumayo, importantes investigaciones antropológicas, históricas y etnohistóricas documentaron tanto el inicio de la explotación de quina y caucho en el piedemonte del Putumayo–Caquetá, como la expansión de las actividades gomíferas en la cuenca baja de estos dos ríos.*¹⁰⁸

El proceso de colonización de esta región que se dio producto de las economías extractivas, liderados por la tristemente célebre “casa Arana” y sus recordadas caucherías, a costa del sacrificio y expoliación de las comunidades étnicas, está igualmente documentadas por CALDERÓN, cuando afirma que:

El establecimiento de comerciantes caucheros colombianos como Crisóstomo Hernández, Abel Calderón y Benjamín Larrañaga, y peruanos como Julio Cesar Arana, y la creación de la Casa Arana, se convirtieron en los principales temas de investigación de la época del caucho en las primeras décadas del siglo xx. Los “escándalos del Putumayo”, la violencia y terror protagonizados por la empresa

¹⁰⁸ CALDERÓN, Camilo Mongua. Caucho, frontera, indígenas e historia regional: un análisis historiográfico de la época del caucho en el Putumayo–Aguarico. Boletín de Antropología, 2018, vol. 33, no 55, p. 16 y 17. “Las fuentes históricas de esta subregión se encuentran dispersas entre Colombia, Ecuador y España. Durante el siglo xix y las primeras décadas del siglo xx, el Putumayo–Aguarico hizo parte de largas disputas por la delimitación e incorporación a las regiones amazónicas de Colombia, Ecuador y Perú, lo que provocó una proliferación de fuentes entre la jurisdicción colombiana y ecuatoriana principalmente. A finales del siglo xix, tanto el territorio el Caquetá (Colombia) como la Provincia del Napo (Ecuador), extendieron su jurisdicción en esta subregión. Para inicios del siglo xx, la llegada de la misión capuchina y la creación de la Prefectura Apostólica del Caquetá y Putumayo generó una jurisdicción espacial que abarcó una importante franja territorial desde el río Caquetá, Putumayo hasta el Aguarico–Napo. El acceso a las fuentes de este territorio fronterizo se encuentra dispersas entre Colombia (Bogotá, Popayán y Pasto) y Ecuador (Quito y Tena). Algunas, como el caso de las fuentes eclesiásticas, presentan un difícil acceso. El caso más preocupante es el estado de los documentos del archivo de la gobernación del Tena, el cual se encuentra en un estado de deterioro por malos manejos administrativos regionales que han llevado a que desaparezca gran parte de los documentos de este espacio administrativo de la Amazonía ecuatoriana que, desde el siglo xix, se ha denominado como la Provincia del Napo”.

emblemática de la región la “Casa Arana”, conocida también como Peruvian Amazon Company (The Peruvian Amazon Rubber Co. Limited), se convirtió en el caso más emblemático de la época del caucho en la Amazonía colombiana y la vorágine que significó para las poblaciones indígenas amazónicas.¹⁰⁹

Así mismo esta región fue objeto de colonización, inicialmente vía misiones hasta 1946, y posteriormente, producto del estallido de la violencia que se dio en nuestro país luego del conocido Bogotazo, algunos cronistas evidencian este éxodo, entre ellos MONTES al indicar que:

A principios del siglo XX el Estado colombiano y la Iglesia católica, decidieron implementar la estrategia de colonización en el Putumayo, a partir de la creación e imposición de un régimen de verdad, que se cimentó en la racialización, purificación, ocupación y propiedad, con el fin de lograr el asentamiento de migrantes nacionales y extranjeros, que coadyuvaran en la ampliación de la frontera de la civilización cristiana, la modernidad y la defensa de la soberanía. Bajo estas premisas, la Misión fundó 15 poblados en el Putumayo, durante la vigencia de la Prefectura Apostólica del Caquetá entre 1905 y 1930¹¹⁰.

Frente a la colonización que se dio por la violencia bipartidista Apraez Gómez refirió:

El Putumayo sufrió procesos acelerados de colonización del territorio por parte de habitantes de otros departamentos que escapaban de la

¹⁰⁹ *Ibidem*, p. 23. “Para el Bajo Putumayo–Caquetá, la primera década del siglo xx representó la consolidación del dominio de la Casa Arana con la explotación de *Hevea guianensis*, *Hevea benthamiana* o jebe débil. La compra de los puestos caucheros de comerciantes, el asesinato de sus propietarios y la explotación del trabajo de las poblaciones indígenas a través de la violencia y el terror, son las historias más conocidas de esta región.”

¹¹⁰ MONTES, Giovany Paolo Arteaga. Capuchinos catalanes y colonización del Putumayo: Puerto Asís, Alvernia y Sucre (1905-1930). Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 2020, vol. 25, no 2, p. 47-68.

violencia política generada por los enfrentamientos entre liberales y conservadores al interior del país, entre 1946 y 1962¹¹¹.

Este escenario es seguido de dos periodos trascendentes en la configuración de la región de la cual hace parte la población de El Tigre; la fiebre petrolera y la llegada de la coca producto de la caída en la producción de hidrocarburos, escenarios que permiten identificar dos momentos de incursión paramilitar al territorio de fuerte injerencia guerrillera, así lo señala Bello Albarracín, cuando afirma:

La zona del Valle del Guamuéz, empieza a consolidarse territorial y poblacionalmente durante la época de la “fiebre petrolera” y el período de la “llegada” de la coca, en la década de los ochenta. (...)

La llegada de las FARC a Putumayo “[...] fue anterior al auge de la coca. Sin embargo, sería el papel de las FARC como reguladoras de un incipiente mercado promovido por el narcotraficante Rodríguez Gacha a partir de 1987, lo que facilitaría la consolidación del grupo guerrillero como autoridad en el Putumayo”. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el “Mexicano”, llegó a la región como resultado de la persecución que el gobierno nacional empezó contra el Cartel de Medellín en el Magdalena medio. A partir de este año, Gonzalo Rodríguez Gacha empieza a controlar el narcotráfico en Putumayo y es en el marco de este control que surge la primera generación de paramilitares, reconocidos en la región con los nombres de “Los Combos” y “Los Masetos.” (...)

La segunda generación de paramilitares en Putumayo se sitúa en el período que va desde 1997 hasta el año 2006 con la presencia del

¹¹¹ APRAEZ GOMEZ, Clara Inés. Impacto de la reparación colectiva en Putumayo, el caso de El Tigre. Una mirada desde el Enfoque de Acción Sin Daño. 2014. Tesis Doctoral. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2014. p. 12. [En Línea]. Recuperado de: <http://bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/680/1/69005352.2014.pdf>

*Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las AUC.*¹¹²

De esta manera se encuentra configurado en el escenario que dio lugar a la masacre perpetrada en El Tigre, legitimada por los paramilitares bajo estigma de ser un pueblo “guerrillero” y “cocalero”.

La masacre ocurrida en el Tigre se puede entender desde varios factores como la ausencia del Estado en una zona rural, ubicada en un área fronteriza del país, donde había presencia de grupos guerrilleros y donde más adelante se desarrollaron actividades económicas ligadas a los cultivos ilícitos y donde, además, existía un interés por parte de empresas para explotar petróleo. Lo que más tarde atrajo la atención de los grupos paramilitares que incursionan en la región y atacan principalmente a la población, con la justificación de que apoyaban a los grupos guerrilleros, ante este panorama resalta que no hubo atención ni reacción inmediata por parte de las autoridades para controlar la zona y proteger a los civiles, por lo que el restablecimiento de sus derechos posteriormente debió hacerse en el marco de la justicia transicional.

2.2 EL DÍA QUE “EL TIGRE” LLORÓ.

Los hechos que dan lugar a la presente investigación son relatados de forma detallada por el Grupo de Memoria Histórica, con ocasión de los resultados del proyecto denominado “Reconstrucción de la memoria histórica en torno a la masacre de El Tigre (Putumayo)”, en dicho texto se advierte lo siguiente:

La noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo, adscrito al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas Unidas de Colombia—AUC— irrumpieron en el territorio de la Inspección de El Tigre, Putumayo, bajo la amenaza de

¹¹² Op. Cit. p. 17, 18, 19.

exterminar a auxiliares de la guerrilla, guerrilleros y milicianos. Con esta acción, los paramilitares dieron cumplimiento a los lineamientos que se habían propuesto en la Tercera Cumbre Nacional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU— (noviembre de 1996): confrontar a la guerrilla y “recuperar” territorios donde estas habían conformado gobiernos paralelos. Asesinatos y desaparición forzada de exclusivamente hombres; quema de casas, motocicletas y vehículos; maltratos físicos y verbales a mujeres, fueron hechos emprendidos por esta avanzada paramilitar y con los cuales se inició una dinámica de control territorial en las zonas urbanas de la subregión del Valle del Guamuéz. La cifra oficial de personas asesinadas en esta masacre es de 28, (todos hombres) mientras que se habla de un número superior de 14 desaparecidas, la mayoría de ellas, lanzadas al río Guamuéz en un acto de desaparecer el cuerpo de las víctimas.

La represión y violencia directa contra la población de El Tigre no terminó con la masacre, sino que se intensificaron durante el período 2001-2006, cuando este mismo Bloque paramilitar establece en la mayoría de las zonas urbanas de la zona del Valle del Guamuéz (Orito, El Tigre, La Hormiga, El Placer, La Dorada) un control territorial permanente, ejerciendo dominio (social, económico y político) en sus habitantes.

De hecho (sic) en junio de 2001, el Bloque Sur Putumayo de las AUC anunció a los pobladores de la Inspección de El Tigre su permanencia en la zona. Desde su llegada a esta Inspección, los paramilitares establecieron un modelo de comportamiento social que reguló la vida de sus habitantes; “otorgaron” plazos para que las personas “involucradas” con la guerrilla se marcharan del pueblo; exigieron

*fidelidad a sus estructuras armadas; y enfatizaron que la explotación de la coca estaría a su cargo*¹¹³.

Como puede observarse, a pesar de que la incursión paramilitar en la zona tuvo una intención contrainsurgente, es decir, que buscó combatir la presencia de guerrillas en esta zona del Putumayo, es de resaltar que las principales víctimas de las acciones paramilitares fueron civiles, donde destaca el asesinato de civiles, amenazas, quema de hogares, enseres, desaparición forzada y la coacción de los residentes del área, además de la continuación del cultivo ilícito de coca.

2.2.1. LOS SUJETOS INDIVIDUALES QUE CONFORMAN EL SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA EL TIGRE (COMO EJERCICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA).

Considero necesario que al interior de esta investigación se haga una mención expresa de todas y cada una de las víctimas fatales que arrojó aquella noche terrible para los pobladores de El Tigre (Putumayo), ello, como un ejercicio de reconstrucción de memoria histórica y reconstrucción del tejido social, debiendo recordar que ellos fueron padres, hermanos, hijos, familiares, amigos, vecinos y conocidos. Que no se extinga su memoria, ellos son:

Ricardo Morales Zuñiga	Hombre	24 años de edad	Comerciante
Humberto Salas	Hombre	25 años de edad	Agricultor
Jairo Zambrano Herrera	Hombre	19 años de edad	Agricultor
Onesimo Samboni Iles	Hombre	37 años de edad	Carnicero - Agricultor

¹¹³ Op. Cit. p. 23.

Marcelo Arévalo Adreda	Hombre	25 años de edad	Estudiante
Mario Antonio Cabrera	Hombre	24 años de edad	Agricultor
Euler Rosero Simaco	Hombre	24 años de edad	Agricultor
Miguel Ángel Rosero Romo	Hombre	50 años de edad	Agricultor
Jazmany Nárvaez	Hombre	17 años de edad	Agricultor
David González	Hombre	27 años de edad	Agricultor
Carlos Cerón	Hombre	22 años de edad	Agricultor
Jose Alveiro Erazo Pérez	Hombre	31 años de edad	Agricultor
Hernando Teheran Cuases	Hombre	20 años de edad	Agricultor
Moises Getial	Hombre	23 años de edad	Agricultor
Cristian	Hombre	23 años de edad	Agricultor
Edgar Arquimedes Bastidas	Hombre	24 años de edad	Agricultor
Elias Meneses	Hombre	30 años de edad	Carnicero
Jaime Alirio Bermeo Sotelo	Hombre	32 años de edad	Agricultor
Andres de Jesús Herrera López	Hombre	24 años de edad	Administrador

Hobeimar Quiñoñez	Hombre	36 años de edad	Oficios Varios
Edgar Ruíz	Hombre	20 años de edad	Agricultor
Gerardo Zambrano Herrera	Hombre	24 años de edad	Agricultor
Sandro Alberto Morales	Hombre	25 años de edad	Agricultor
Hernando Beltrán Cuases	Hombre	25 años de edad	Agricultor
Wilmer Narvaez Álvarez	Hombre	Sin Datos	Sin Datos
Cesar Augusto Ramírez Tobar	Hombre	Sin Datos	Sin Datos
NN	Hombre	Sin Datos	Sin Datos
NN	Hombre	Sin Datos	Sin Datos

Fuente: Tabla 1: Víctimas fatales de la masacre en la Inspección de Policía El Tigre, Putumayo. 9 de enero de 1999.¹¹⁴

2.1.2. EL PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL A EL TIGRE (PUTUMAYO) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO.

i) El Tigre, como prueba piloto de reparación integral de un sujeto colectivo.

Es de advertir que fue la misma comunidad la encargada de adelantar el Plan de Reparación Colectiva, convirtiéndose para aquel entonces en un Plan Piloto, esta iniciativa surgió a partir del año 2008, situación que se encuentra ampliamente documentada en el informe *“PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. UNIDOS RECONSTRUIREMOS VIDA. EL TIGRE. INSPECCIÓN DEL MUNICIPIO VALLE*

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 31.

GUAMUÉZ PUTUMAYO.”,¹¹⁵ en el que se advierte que se tuvieron como tareas principales iniciales las de elaborar un diagnóstico respecto de los hechos acaecidos, inventariar los daños causados y proponer las posibles fórmulas de reparación.

En dicho escenario la comunidad precisó la necesidad de atender asuntos puntuales de salud; educación; atención psicosocial; temas de infraestructura como construcción de vías y acueducto; igualmente se trató temas de proyectos productivos; asistencia alimentaria y seguridad¹¹⁶; para el año 2010, se dio inicio a la segunda fase de dicho plan piloto, el cual tuvo como eje central la formulación de las propuestas de reparación, cuyo trabajo debió ser articulado con las entidades estatales del orden nacional, regional y local, aclarando para ese momento, no excluir la posible reparación judicial y administrativa¹¹⁷.

Frente a dicha reparación colectiva el documento indicó:

La Reparación Colectiva tiene un reto enorme pues busca coordinar la acción estatal para producir efectos reparadores sostenidos en sujetos colectivos que han soportado diversas formas de violencia y afectación de derechos frente a la ausencia o con la coadyuvancia del Estado. Para que la política de reparación colectiva tenga significado no puede reemplazar ni repetir lo que puede y debe ser alcanzado por la política de reparación individual a cargo del Estado. Por eso la Reparación Colectiva debe orientarse de manera exclusiva a la reversión de las afectaciones colectivas, que no es lo mismo que la suma de reparaciones individuales¹¹⁸.

¹¹⁵ PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. UNIDOS RECONSTRUIREMOS VIDA. EL TIGRE. INSPECCIÓN DEL MUNICIPIO VALLE GUAMUÉZ PUTUMAYO. “Este documento fue construido por la comunidad de El Tigre, inspección del Valle del Guamuéz en el marco del proceso pilotos de Reparación Colectiva adelantado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación desde el año 2008 con el apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres”.

¹¹⁶ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 7.

¹¹⁷ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 8.

¹¹⁸ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 14.

Dichas medidas de reparación colectiva consistieron en:

- 1. Garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres afectadas por el conflicto armado interno en la Inspección El Tigre, a través de Implementación de programas que permitan la inclusión social; con el fin formar ciudadanos con capacidades y competencias que puedan participar de manera activa en la construcción de país, explorar sus talentos y creatividad para desarrollar su proyecto de vida.*
- 2. Garantías para la recuperación y mejoramiento del acceso a los servicios de salud integral de la comunidad urbana y rural de la Inspección El Tigre.*
- 3. Recuperación y creación de espacios culturales, recreativos y deportivos que permitan la ocupación provechosa del tiempo libre y contribuyan al desarrollo humano integral tomando en consideración particularidades por género, etnia o edad de la población urbana y rural de la inspección.*
- 4. Recuperación del río y del muelle como espacios de encuentro y desarrollo cultural y económico.*
- 5. Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las redes e infraestructura de los servicios públicos del casco urbano que fueron deterioradas por efectos del conflicto.*
- 6. Generación de oportunidades para reactivación de la economía, el acceso laboral y la generación de ingresos de las familias y de las mujeres de zona urbana y rural de la inspección.*

7. Recuperación y fortalecimiento de la vocación y producción agropecuaria perdida por efectos de conflicto en la zona rural de la inspección.

8. Programa de atención especial integral a mujeres afectadas por el conflicto de las zonas urbana y rural de la inspección.

9. Garantizar el fortalecimiento de capacidades de organización y exigibilidad de derechos de los y las jóvenes de la inspección (urbano y rural).

10. Garantizar el fortalecimiento y recuperación de los espacios organizativos comunitarios de la Inspección de El Tigre.

11. Programa para la dignificación de las víctimas y procesos de memoria histórica.

12. Garantías para ejercicio de los derechos de verdad, justicia y garantías de no repetición.

13. Recuperar y fortalecer la organización política, sociocultural y tradicional del Cabildo Embera Chami de la Vereda las Palmeras.

14. Recuperar y fortalecer la organización política, sociocultural y tradicional del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Vereda Villa Arboleda¹¹⁹.

En este momento es importante recordar que el proceso de reparación colectiva de la comunidad El Tigre, fue un proceso basado en una visión amplia del concepto de

¹¹⁹ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 8-9.

sujeto colectivo, y no de manera restringida, ésta última de la cual hacen parte los grupos étnicos, esto es: pueblos indígenas, comunidades negras y pueblo Rrom¹²⁰, en tal sentido indicó el documento:

La comunidad de la inspección de El Tigre se constituye en sujeto de reparación colectiva en la medida en que se trata de una comunidad que habita una misma zona o territorio, determinado por los límites de la Inspección, así como goza de un reconocimiento social, jurídico y político.

Por otra parte, al interior de ésta se encuentran poblaciones específicas que son sujetos de reparación colectiva en sí mismos y en conjunto con el resto de la comunidad, como son el Cabildo Indígena Embera de la vereda Las Palmeras y la Comunidad Negra representada por el Consejo Comunitario de Villa Arboleda.

Como se señaló en el capítulo inicial del documento y como se presenta en el análisis siguiente, esta comunidad fue objeto de graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos que afectaron la vida en comunidad y el proyecto de vida colectivo.

El sujeto colectivo del Piloto de El Tigre está compuesto aproximadamente por 4.280 personas de diferentes edades y sexo, distribuidas en 10 veredas, un Cabildo Indígena y un Consejo Comunitario de Comunidades Negras¹²¹.

¹²⁰ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. “En resumen, la reparación colectiva debe ser entendida como las acciones orientadas a subsanar el daño colectivo causado por el conflicto armado, debiendo incluir tanto los elementos de la reparación integral (indemnización, restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición); como los objetivos del artículo 49 de la ley 975 de 2005 (recuperación de la institucionalidad, rehabilitación sicosocial y promoción de derechos); y que a su vez deben ser transformadoras en el sentido que permitan superar los impactos y daños que se hayan tenido en lo público, lo político y en el proyecto de vida colectivo”. p. 13

¹²¹ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 16.

A partir del proceso de reparación organizado por la misma comunidad en el año 2008, es interesante analizar cómo se puede lograr una indemnización y reparación efectiva teniendo en cuenta la palabra y los intereses de las comunidades, pues solo ellos, conocen adecuadamente sus necesidades y las oportunidades de desarrollo que les privó la guerra en su territorio, por ello se resalta la demanda de educación, vías de acceso, parques y demás espacios de reencuentro, esparcimiento y la necesidad de construir tejido social, para garantizar que en el futuro, no surjan nuevos focos de violencia en la zona.

2.1.3. LAS DISTINTAS FORMAS Y ETAPAS DE LA REPARACIÓN COLECTIVA DEL SUJETO COLECTIVO EL TIGRE.

A fin de abordar las distintas maneras en que se reparó a la comunidad, es necesario precisar cómo fue entendida la reparación colectiva por parte del sujeto colectivo de EL TIGRE, dicha perspectiva se encuentra vertida en el pluri citado informe al que venimos haciendo referencia, a este respecto se menciona que:

“¿Qué es la Reparación Colectiva? La Reparación Colectiva es uno de los componentes de la política pública de reparación integral ejecutada por el Estado colombiano. Se realizará a través de la acción sistémica y coordinada del Estado y la participación efectiva de las comunidades, grupos políticos y sociales, organizaciones, ciudadanos y ciudadanas y demás actores sociales y políticos pertinentes. La reparación colectiva propenderá por el desarrollo conjunto de tres propósitos: la inclusión ciudadana de los sujetos colectivos como sujetos plenos de derecho; la reconstrucción de confianza de la sociedad en el Estado en las zonas y territorios afectados por la violencia; y la recuperación de la institucionalidad legítima del Estado social de derecho capaz de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Se llevará a cabo por medio de un conjunto de

medidas políticas, materiales y simbólicas, que se efectuarán de manera pronta, accesible y eficaz, con base en los principios, procedimientos, medidas e instituciones establecidas en este Programa. En este sentido, la Reparación Colectiva no se limitará a restituir a las víctimas colectivas a su situación antes de la violencia, sino que buscará producir un cambio, con base en un proceso participativo, a través del cual las propias víctimas sean conscientes de sus derechos, definan la reparación y propendan por su vinculación al escenario de la vida pública y política del país como sujetos de derechos en el marco de un Estado Social de Derecho, así como por la reconstrucción de sus proyectos de vida como colectivos.”¹²²

La política pública de reparación colectiva debe ir más allá en sus efectos reparadores que la reparación individual, como quiera que se trata de un mecanismo según el cual se precisa reversar las afectaciones colectivas, lo que dista mucho de las reparaciones individuales, por ello es necesaria esa identificación de los hechos y de esos ejes generadores de violaciones colectivas. A este respecto Rebolledo, indicó:

En el marco de la situación de violencia de muchas comunidades en Colombia, en las que prima una sistematicidad de eventos, el acompañamiento implica una lectura no sólo de los acontecimientos puntuales sino de los efectos que han dejado y continúan generando al perpetuar el ciclo de violencia y reiterar el paradigma víctima-agresor; implica identificar no sólo la ausencia de un reconocimiento adecuado del impacto en las poblaciones, con respuestas apropiadas cultural, social y subjetivamente, sino también la impunidad de los hechos. Reducir las medidas de reparación sólo a las indemnizatorias obtura, a la postre, todo el proceso de reparación integral. Una forma importante de contribuir a romper el ciclo de violencia es consolidar las perspectivas y prácticas que pueden ayudar y facilitar los procesos de

¹²² Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 12

*recuperación emocional y de superación de los daños generados por los conflictos, para promover paralelamente la rehabilitación, la reconstrucción física, la participación en los procesos judiciales, la indemnización, el bienestar emocional y psicosocial. De esta manera, se puede propiciar un proceso de reparación sostenible y consistente con las reales necesidades de las comunidades y los individuos afectados.*¹²³

Por sus características la comunidad del El Tigre es un sujeto colectivo, ello, en atención a que sus individuos consuetudinariamente se desenvuelven en un espacio determinado, al igual que gozan de un reconocimiento tanto social como jurídico y político.¹²⁴ A sí mismo, al interior de la comunidad de El Tigre, existen sujetos de derecho colectivo propiamente dichos, esto es, “*Cabildo Indígena Embera de la vereda Las Palmeras y la Comunidad Negra representada por el Consejo Comunitario de Villa Arboleda*”.¹²⁵ Frente a la características de los sujetos colectivos Hernández afirmó:

Clarificar el concepto de reparación colectiva implica determinar la existencia de titulares de derechos de naturaleza colectiva en contraposición de las víctimas individuales. En ese sentido, no resulta fácil una definición que recoja los elementos definitorios de sujetos colectivos, descripción normativa que reviste importancia en la medida que, al encuadrarse un colectivo en el supuesto de hecho de la norma, calificaría -el colectivo- como titular de beneficios administrativos a cargo de una obligación estatal en el marco de un programa de reparación. En ese sentido, la reparación colectiva es una forma de

¹²³ REBOLLEDO, Olga; RONDÓN, Lina. Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial con víctimas individuales y colectivas en el marco del proceso de reparación. Revista de estudios sociales, 2010, no 36, p. 41.

¹²⁴ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 16

¹²⁵ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 17 “*VEREDA O COMUNIDAD PERSONAS: Brisas del Guamuéz 70; Campo Bello 178; El Paraíso 110; El Rosario 260; La Raya 289; Palmeras 160; Las Pavas 90; Maravelez 500; Villa Hermosa 182; Naranjito (en proceso de conformación) 48 Casco Urbano 1900; Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Villa Arboleda 250; Cabildo Embera Las Palmeras 243; TOTAL POBLACION (Personas) 4.280*”.

*reparación que tiene como fundamento el daño que se concreta por hechos masivos y sistemáticos violatorios de Derechos Humanos, cuyos titulares no son individuos per se, sino la agrupación de estos, unidos por una suerte de circunstancias históricas que los sitúan como blanco de vulneraciones, menoscabos y desintegración del tejido social en el marco de un conflicto armado o de regímenes autoritarios. Se produce con independencia de las reparaciones individuales que se establezcan, puesto que no son conceptos excluyentes.*¹²⁶

Los hechos victimizantes identificados por el sujeto de reparación de El Tigre, y que han sido ampliamente detallados en el informe analizado y que pueden ser sintetizados, hacen referencia a la incursión paramilitar el día de los hechos, esto es, la noche del 9 de enero de 1999, que dio como resultados varias personas asesinadas y un número indeterminado de desaparecidas, en cuyo evento se produjo igualmente la quema de algunas viviendas; a más de ello; converge la permanente presencia y dominio territorial, durante los años 2001 al 2006, de dicho grupo armado ilegal, misma que operó al parecer, en connivencia con algunos organismos del Estado Colombiano; todos estos hechos generaron en sus pobladores una suerte de estigmatización. En virtud de lo anterior, se identificaron, por parte de la población objeto de análisis, los siguientes daños:

Los daños que fueron identificados por la población El Tigre consisten en:

“PRINCIPALES DAÑOS:

- *Daño psicológico diferenciado para mujeres, hombres, niños y niñas. Profundización de la pobreza e impacto socioeconómico:* (afectación de la movilidad de la comunidad; cambio en el uso del suelo; la destrucción de

¹²⁶ HERNANDEZ, Mary Cruz Ortega; CONTRERAS, Rafaela Sayas. El concepto de reparación colectiva en el marco de la justicia transicional. Revista Jurídica Mario Alario D' Filippo, 2014, vol. 6, no 12, p. 43.

bienes materiales: quema de casas y desaparición de veredas; pérdida de ingresos; destrucción, hurto o pérdida de vivienda, enseres y bienes).

- *Alteración en la cultura:* (pérdida del sentido de la norma; profundización de la estigmatización; cambio en la movilidad y uso del suelo por presencia de fosas; imposibilidad del duelo: los entierros solitarios; alteración de la cultura de las comunidades negras y de su proceso organizativo).
- *Afectación a las organizaciones:* (indígenas; comunidad negra de Villa Arboleda; juntas de acción comunal; movimiento social; cooperativa de transporte COOTRANSTIGRE; comunidad educativa; organizaciones de mujeres); alteración de las redes de apoyo y criminalización de la organización social).
- *Profundización de la ilegitimidad del Estado:* (impunidad).
- *Violencia contra las mujeres:* (los daños e impactos de la violencia sexual).
- *Afectación o pérdida de la prestación de servicios públicos de agua, energía eléctrica y saneamiento.*
- *Afectación del derecho a la educación.*
- *Cambios en la dinámica comunitaria:* (desplazamientos y desintegración de la comunidad; asesinatos de población masculina).”¹²⁷

Como puede observarse, la comunidad de El Tigre sufrió diversos flagelos producto de la incursión de actores armados ilegales, que aprovechando la ausencia de las autoridades o la poca acción del Estado en dicho territorio, pudieron ejecutar todo tipo de vejámenes en contra de la población civil, que, en últimas, vieron afectado su estilo de vida de manera contundente frente a las diferentes acciones de violencia perpetradas por los actores armados.

Por otro lado, como se advertido anteriormente, el caso de El Tigre se constituye como un ejemplo concreto de lo que se ha querido definir como sujeto colectivo, en tanto que, dentro de la misma población hay diferentes tipos de comunidades:

¹²⁷Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 20-38.

mestizas y étnicas, entre las que se cuentan a los embera chamí y a las comunidades afro. Por ello, el reconocimiento y acción del Estado frente a estas va orientado no solo a reparar los daños sufridos por la guerra, sino también a crear tejido social, con el fin de garantizar que en el futuro no surjan nuevos focos de violencia en la zona y haya una efectiva presencia de la institucionalidad del Estado y el goce pleno de derechos para la población civil.

2.1.4. LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA

Así, identificados con exactitud los daños por parte de la comunidad de El Tigre, es necesario, para efectos metodológicos, hacer referencia cada una de las acciones afirmativas reparadoras¹²⁸ realizadas¹²⁹ por el Estado colombiano en este proceso piloto, lo cual nos servirá de colofón de nuestra investigación, para determinar las razones por las cuales dicha comunidad ha sufrido un desmedro en su proceso colectivo de reparación integral, evidenciando con datos exactos cuáles asuntos siguen siendo hoy en día problemáticos. Dicha reparación inicia con:

- **Garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres afectadas por el conflicto armado interno en la Inspección El Tigre, a través de Implementación de programas que permitan inclusión social; con el fin formar ciudadanos con capacidades y competencias que puedan participar de manera activa en la construcción de país, explorar sus talentos y creatividad para desarrollar su proyecto de vida;** (Programa de mejoramiento de la Infraestructura física, dotación y recomposición del cuerpo docente de La Institución Educativa Rural El Tigre; programa de construcción, mejoramiento y recomposición del cuerpo docente de la Institución Educativa Maravelez;

¹²⁸Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 39-55.

¹²⁹ Resolución No. 1602 de 09 mayo de 2019. “Por la cual se da cumplimiento a la implementación del Plan de Reparación Integral del SRC El Tigre, comunidad campesina Inspección de Policía El Tigre, Municipio Valle del Guamuez”

Apoyos educativos para la permanencia de los estudiantes; Garantía de oportunidades para acceder a la educación superior; Garantía del derecho a la recreación de niños y niñas en zonas rurales)¹³⁰.

Frente a este tópico, precisó el informe que se procedió a construir, mejorar y dotar algunos espacios colectivos, así como a recomponer los cuerpos docentes por medio de la contratación de personal especializado en diferentes áreas del conocimiento; igualmente el informe precisa que se destaca la creación de un internado para bachillerato y la intervención de la institución educativa rural Maravelez, así como la creación de restaurantes escolares tanto de la zona urbana como la rural.

En cuanto a facilitar el acceso a la educación superior, la comunidad propuso y vertió en el informe analizado¹³¹ la adopción de un programa de admisión flexible, tanto de instituciones públicas como de privadas, de la mano del otorgamiento de becas y programas de bienestar, esto, para los mejores bachilleres víctimas de las zonas urbanas y rurales de la Inspección.

El comienzo de la reparación comunitaria¹³² se enfocó en el ámbito educativo tanto en la enseñanza básica y media, como en la superior, así mismo con la adecuación de programas de alimentación estudiantil y la flexibilización educativa para facilitar el acceso de los jóvenes a las universidades tanto públicas como privadas. Este paso es vital porque la garantía del derecho a la educación¹³³ permite el desarrollo de destrezas personales y amplía las posibilidades de tener mejores empleos, ingresos y en general una mejor calidad de vida para los jóvenes de El Tigre en el futuro. Sin embargo, es preciso decir que, para lograr una reparación integral, se

¹³⁰ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 39.

¹³¹ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 39.

¹³² BERRIO, Natalia Andrea Cardona; ÁLVAREZ, Orlando Arroyave; RAMÍREZ, Luis. Procesos de reparación, entre la reparación estatal y la recuperación comunitaria. El Ágora USB, 2019, vol. 19, no 2, p. 393.

¹³³ LERMA, Carlos Alberto. El derecho a la educación en Colombia. Buenos Aires: Flape, 2007. p. 4-5.

deben garantizar los demás derechos, individuales, económicos y colectivos de la comunidad.

- **Garantías para la recuperación y mejoramiento del acceso a los servicios de salud integral de la comunidad urbana y rural de la Inspección El Tigre, como un derecho fundamental:** (Garantía de acceso general al derecho a la salud en el casco urbano de la inspección; Garantía de atención psicosocial especializada para víctimas directas e indirectas del conflicto armado; Garantía de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva; Garantía de acceso general al derecho a la salud en la vereda Maravelez; Garantía de acceso general al derecho a la salud en la Vereda Villa Arboleda).¹³⁴

Esta intervención para la población de El Tigre¹³⁵, según el informe en comento consistió en la Dotación, tanto de equipo como de personal calificado, y puesta en funcionamiento de un centro de Salud urbano, a fin de garantizar la atención permanente en salud, en especial dos puestos de salud en las Veredas Maravelez y Villa Arboleda. Lo anterior, de la mano de programas epidemiológicos a fin de paliar las posibles enfermedades derivadas de las aspersiones aéreas por glifosato, y que se llegaren a realizar, por la puesta en marcha del Plan Colombia.

Frente al impacto de las aspersiones Mattié indicó:

La acción de la fumigación pone en escena un juego que "hace y deshace la sociedad" mediante la demostración (Balandier, 1994: p. 15). La fumigación representa la danza propia de una racionalidad económica que quiere maximizar la eficacia en el uso del espacio. Esa "caricia" de la avioneta a los cultivos puede representar una agresión gratuita o justificada, un castigo o

¹³⁴ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA. p. 40.

¹³⁵ La población de El Tigre se encuentra integrada por 10 veredas (El Tigre-casco urbano, La Raya, El Paraíso, Las Pavas, Campo Bello, Maravélez, El Rosario, Villa Arboleda, Las Palmeras, Villa Hermosa, Brisas del Guamuéz), un cabildo indígena y un Consejo Comunitario de Comunidades Negras.

*sanción a la pareja ser humano-naturaleza y al resultado de esa unión a través del tiempo que se ha plasmado en un paisaje que expresa estéticas de vida. Todas las poblaciones de plantas, animales, seres humanos y espirituales reciben la lluvia. Tal vez por haber provocado desequilibrios en modelos ecológicos y económicos. Por haber retado poderes, sin saberlo*¹³⁶.

Igualmente se procuró promover la atención psicosocial y comunitaria, en tal sentido el documento expresó que el acompañamiento debe ser: *“individual, familiar, grupal, con enfoque diferencial por género, etnia y generación, que les ayude a tramitar los daños morales, psicológicos y culturales padecidos durante los períodos de entrada y control paramilitar”*.¹³⁷ Asistencia en salud sexual y reproductiva.

En lo anterior se evidencian varios problemas que no permiten que la reparación integral avance de manera coordinada. Primero, se habla de la creación de los puestos de salud con la dotación médica necesaria. Sin embargo, no se está tomando en cuenta la presencia de cultivos ilícitos o, dicho de otra manera, el Estado planea continuar con la aspersión aérea, es decir, que, con esta acción, los esfuerzos en salud pierden fuerza, en tanto el uso de glifosato tiene consecuencias visibles¹³⁸ sobre la salud de la población y sobre su economía, en tanto se afectan los cultivos de alimentos y las fuentes hídricas que sirven de sustento a las poblaciones rurales.

En conclusión, el derecho a la salud es vital para garantizar la calidad de vida de la población, sin embargo, este no puede verse afectado por acciones de aspersión llevadas a cabo por las autoridades, mostrando así, que el problema de los cultivos ilícitos en la zona, aún no se han resueltos y esto, puede poner nuevamente en riesgo a la población.

¹³⁶ MATTIÉ, Mailer. Las fumigaciones del Plan Colombia. Red de Ecología Social Amigos de la Tierra, Montevideo (Uruguay), 2003. p. 2.

¹³⁷ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 41.

¹³⁸ CAMINO, Myriam; APARICIO, Virginia. Aspectos ambientales del uso de Glifosato. Estación Experimental Balcarce. Ediciones INTA, 2010, p. 31.

- **Recuperación y creación de espacios culturales, recreativos y deportivos que permitan la ocupación provechosa del tiempo libre y contribuyan al desarrollo humano integral tomando en consideración particularidades por género, etnia o edad de la población urbana y rural de la inspección:** (Programa para la recuperación de prácticas y espacios deportivos y recuperación de prácticas culturales, sociales y comunitarias; Programa para la recuperación de expresiones artísticas y culturales con énfasis en la superación de daño psicosocial ocasionado por el conflicto).¹³⁹

Es fundamental la recuperación de prácticas lúdicas, culturales y deportivas comunitarias, afirma el informe en estudio, para lo cual se impulsó la creación de escuelas de deportes, así como el arreglo, creación y la dotación de dichos escenarios, acompañados de programas de funcionamiento; de igual manera se propició, se indica, la reactivación de eventos masivos tales como bazares, fiestas patronales y religiosas. Incluyendo finalmente se afirma, la creación de escuelas de arte y música.

Los derechos de recreación y deportes y la realización de actividades artísticas y culturales son importantes¹⁴⁰ en la medida en que mejoran las relaciones dentro de la comunidad y potencian los talentos de los jóvenes, inspirándolos crear y llevar a cabo sus proyectos de vida, son acciones que pueden impactar positivamente a las comunidades a futuro.

En este aspecto, también es vital que el Estado fomente los intercambios con otras regiones, con el fin de que, en el ámbito del deporte los jóvenes de El Tigre se integren al máximo con personas de otras regiones y en ese sentido, haya una mejor compenetración con lo que significa pertenecer al país y ser ciudadano colombiano.

¹³⁹ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 42.

¹⁴⁰ TUÑÓN, Ianina; LAIÑO, Fernando; CASTRO, Hernán. El juego recreativo y el deporte social como política de derecho. Su relación con la infancia en condiciones de vulnerabilidad social. Educación Física y Ciencia, 2014, vol. 16, no 1. [En Línea]. Recuperado de: file:///D:/5059-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8765-1-10-20140626.pdf. Noviembre de 2020. p. 2.

Para concluir debemos indicar que la reparación por vías del deporte y la cultura es una de las acciones reparadoras importantes dentro del proceso de reconstrucción de las relaciones al interior de El Tigre, es una estrategia acertada que motiva a los miembros de la comunidad a superar parte de los flagelos sufridos por el conflicto armado.

- **Recuperación del río y del muelle como espacios de encuentro y desarrollo cultural y económico:** (Resignificación del río como espacio de encuentro y recreación; Realización de actos simbólicos de resignificación del río; Recuperación ambiental del río; Construcción de un muelle para la integración económica de productos y personas de la región; Realización de actividades diversas en el río para convertirlo en espacio de recreación e integración familiar).¹⁴¹

Al respecto se procedió, se indica, a realizar algunos actos simbólicos entorno al río, resignificando su naturaleza, y disponiendo su utilización práctica.

La recuperación del río y del muelle son elementos que pueden servir para la reactivación económica de la zona y para facilitar también, la adecuación de espacios de encuentro entre los pobladores de El Tigre. Esta acción puede facilitar la comunicación del territorio con otros espacios del departamento del Putumayo, cuestión importante para realizar intercambios y transacciones comerciales y de integración.

- **Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las redes e infraestructura de los servicios públicos del casco urbano que fueron deterioradas por efectos del conflicto.**¹⁴²

¹⁴¹ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 43.

¹⁴² Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 43.

Se dispuso, agrega el informe, el mejoramiento del alumbrado público, así como el de los servicios de acueducto y alcantarillado, todos ellos, para el casco urbano.

Los servicios públicos como lo son el alumbrado público, el acueducto y alcantarillado son esenciales para permitir que la población tenga calidad de vida y que estas puedan apropiarse de mejor manera del territorio, en tanto puedan tener acceso al agua, electricidad y fácil manejo de residuos y aguas negras.

Los servicios públicos deben ser prestados por el Estado¹⁴³ en tanto, hacen parte de los derechos ciudadanos, y ante las acciones violentas ejecutadas en la inspección, es necesario la readecuación de estos servicios que permitan o mejoren las condiciones de vida en El Tigre.

- **Generación de oportunidades para reactivación de la economía, el acceso laboral y la generación de ingresos de las familias y de las mujeres de zona urbana y rural de la inspección:** (Programa de restitución colectiva de redes productivas, comerciales y económicas).¹⁴⁴

Se propuso, advierte el informe, explorar las iniciativas productivas de la comunidad, se incentivó la creación de una tienda comunitaria, así como la conformación de famiempresas y microempresas; así mismo, se le apostó al ecoturismo, y a la puesta en marcha de un fondo rotatorio que permita el acceso al crédito en condiciones de fácil acceso de sus pobladores, todo lo anterior, de la mano de un proceso de formación y capacitación técnica y tecnológica.

La economía es otro aspecto central para permitir que la comunidad de El Tigre como sujeto colectivo pueda reescribir una historia diferente a la vivida por las acciones de la guerra.

¹⁴³ MARTÍNEZ, Augusto Durán. Estado Constitucional de Derecho y servicios públicos. A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional, 2015, vol. 15, no 60, [En Línea]. Recuperado de: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/viewFile/52/355>. p. 43.

¹⁴⁴ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 43.

La idea de generar diferentes tipos de asociaciones económicas que integran a cada uno de los habitantes o miembros de diferentes familias también refuerza los lazos de amistad, unión y cercanía, esenciales en los procesos de socialización posteriores a los daños recibidos por los actores armados.

En conclusión, la inversión en materia comercial y formativa para el desarrollo de negocios y empresas es central para permitir que los miembros de El Tigre permanezcan juntos como comunidad y tengan los elementos necesarios para adquirir su sustento de manera legal, por medio de iniciativas comunitarias, y también públicas.

- **Recuperación y fortalecimiento de la vocación y producción agropecuaria perdida por efectos de conflicto en la zona rural de la inspección:** (Programa para la reactivación de la vocación agropecuaria y la garantía de seguridad alimentaria de los habitantes de la inspección de El Tigre).¹⁴⁵

Este acápite, se llevó a cabo un estudio de suelos para que de esa manera se identificara y se definiera la viabilidad de algunos cultivos, así como la puesta en marcha de un proyecto ganadero, la implementación de huertas caseras y granjas integrales como garantía de seguridad alimentaria.

La presencia de cultivos ilícitos fue uno de los problemas identificados en la zona, los cuales eran administrados por los actores ilegales¹⁴⁶. Por ello, la alternativa de crear proyectos centrados en actividades agropecuarias puede ser una manera viable de reemplazar los cultivos ilícitos y desincentivar la llegada de nuevos actores armados a la región, además de que se permite que los pobladores tengan asegurado su acceso a alimentos.

¹⁴⁵ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 45.

¹⁴⁶ DÍAZ ESCOBAR, Ana María, et al. Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia. 2004. [En Línea]. Recuperado de: <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/7865/dcede2004-18.pdf?sequence=1>. p. 32.

Finalmente, la puesta en marcha de este tipo de proyectos también ayuda con la reactivación económica que se mencionó anteriormente, en tanto se busca el desarrollo de actividades que involucren a la comunidad y les permita obtener ingresos de manera continua que faciliten la satisfacción de las necesidades básicas diarias de cada familia.

- **Programa de atención especial integral a mujeres afectadas por el conflicto de las zonas urbana y rural de la inspección:** (Programa de atención especial integral a mujeres afectadas por el conflicto de las zonas urbana y rural de la inspección).¹⁴⁷

El Plan de reparación menciona que se formó en DDHH y Derechos de las mujeres, con acompañamiento psicosocial tanto individual como colectivo, de la mano de profesionales especializados.

La implementación de este punto es necesaria en tanto que las mujeres son algunas de las víctimas más recurrentes de la guerra¹⁴⁸: por vejámenes físicos, sexuales, psicológicos, etc. Incluso, dentro del Derecho Internacional Humanitario, la mujer aparece como una de las personas que se deben proteger dentro de las confrontaciones armadas.

Por ello, que exista una reparación directa y exclusiva hacia las mujeres de El Tigre, es también reconocer su papel como víctimas centrales dentro de las acciones y las incursiones de los diferentes grupos armados a la zona.

- **Garantizar el fortalecimiento de capacidades de organización y exigibilidad de derechos de los y las jóvenes de la inspección (urbano**

¹⁴⁷ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 45.

¹⁴⁸ MARTÍNEZ MERLO, Jorge Andrés; GUERRA-RAMÍREZ, Merilyn; SUÁREZ-VILLA, Mariela. EXPERIENCIAS EN MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO-COLOMBIA. Ciencia y enfermería, 2020, vol. 26. p. 3. [En Línea]. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v26/0717-9553-cienf-26-13.pdf>.

y rural): (Promoción de organizaciones juveniles comunitarias; Programa de formación de Derechos Humanos y prevención dirigido a jóvenes).¹⁴⁹

A este respecto es interesante destacar, menciona el Plan de Reparación Colectiva, los esfuerzos en la promoción de la organización juvenil rural y urbana, a fin de prevenir el reclutamiento forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Como actividad de recomposición del tejido social, se indica, se formó en DDHH y Derechos de las mujeres, educación sexual y reproductiva, brindando un acompañamiento psicosocial tanto individual como colectivo, ello, de la mano de profesionales especializados. Hubo igualmente se indica, participación en la elaboración de políticas públicas juveniles y tendientes a prevenir la violencia intrafamiliar, con énfasis en la formación de formadores a fin de multiplicar dichos aprendizajes.

La asistencia a la población juvenil va a permitir que este tipo de población reconozca factores de riesgo y puedan contar con los canales adecuados para pedir ayudar o realizar algún tipo de denuncia, como en el caso del reclutamiento forzado.

Los jóvenes son parte importante dentro del proceso de no repetición, pues son ellos, quienes dirigirán a la comunidad y la gobernarán en el mediano plazo y largo plazo, por ello, la creación de proyectos integrales por parte del Estado también debe cobijarlos a ellos e incluirlos de manera directa en los procesos de construcción de tejido social.

- **Fortalecimiento y recuperación de los espacios organizativos comunitarios de la Inspección de El Tigre:** (Programas de formación; Construcción y dotación de espacios físicos para la organización y participación; Comunitaria; Fortalecimiento de organizaciones de mujeres,

¹⁴⁹ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 46.

jóvenes, adultos y adultas mayores y de hombres, y del consejo comunitario de Villa Arboleda).¹⁵⁰

Se indica en el plan que se llevó a cabo un Diplomado en DDHH, a fin de brindar herramientas de exigibilidad en su ejercicio; se fortaleció el sistema de Juntas de Acción Comunal, como espacio de integración política comunitaria, para lo cual se dotó dichos escenarios.

El acercamiento de la población hacia los espacios de participación comunitaria¹⁵¹ y de conocimientos de los derechos humanos tiene como objetivo, mejorar los canales de comunicación entre la población y el Estado, a su vez, que la población pueda organizarse a fin de detectar las necesidades de la comunidad y de las obras necesarias que se deben realizar para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del lugar.

El conocimiento sobre los derechos humanos permite que la población identifique situaciones que ponen en riesgo a la población y que se conozcan los canales adecuados para pedir asistencia de las autoridades, a fin de evitar nuevas violaciones de los derechos de los habitantes.

- **Implementación de estrategias para dignificación de las víctimas y procesos de memoria histórica:** (Programa integral de dignificación de las víctimas).¹⁵²

El Plan menciona que se creó un parque recreativo en memoria de las víctimas, así como la construcción de un monumento conmemorativo a fin de fortalecer los procesos de memoria histórica contada como desde las víctimas del conflicto

¹⁵⁰ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 46.

¹⁵¹ VELÁSQUEZ, Fabio; GONZÁLEZ, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Bogotá: Fundación Corona, 2003. [En Línea]. Recuperado de: <https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/31126817/social36.pdf?1366060111=&response-content-..> p. 19.

¹⁵² Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 47.

armado en virtud del proceso de Reparación simbólica¹⁵³. Frente a la necesidad de fortalecer esos procesos y memoria histórica, Gaborit indicó:

Las grandes mayorías de las sociedades latinoamericanas, que poseen una historia larga de represión y guerra, tienen necesidad de acceder a esa memoria como paso indispensable para obtener siquiera un módico de salud mental e ir configurando su identidad personal y colectiva. En esa historia personal y colectiva se han experimentado grandes pérdidas y, por lo tanto, la recuperación de la memoria histórica debe tener la intención de reparar el tejido social rasgado por la mentira oficial, el discurso encubridor y el cinismo político¹⁵⁴.

Igualmente, se afirma, se procedió a realizar un reconocimiento público como víctimas y no como actores armados de la comunidad de El Tigre, esto se llevó a cabo a través de medios de comunicación masivos.

La creación de la memoria histórica de la comunidad permite en el futuro cercano, evitar que nuevas acciones de guerra o violencia vuelvan a presentarse dentro de la comunidad, dignificar a las víctimas y recordarlas es un paso importante en la construcción de tejido social, en tanto las víctimas, puedan recordar a sus seres queridos desaparecidos, así mismo de que su memoria se recuerde con respeto.

Por último, la memoria histórica también es una vía que le permite a las víctimas pedirle al Estado justicia y reparación frente al sufrimiento que les han ocasionado los actores armados: legales e ilegales, además de que a la población se le reconozca como víctima y no como un actor más dentro del conflicto.

¹⁵³ GUILIS, Graciela, et al. El concepto de reparación simbólica. Equipo de salud mental del CELS. Buenos Aires, 2010. p. 6.

¹⁵⁴ GABORIT, Mauricio. Memoria histórica: relato desde las víctimas. Pensamiento psicológico, 2006, vol. 2, no 6, p. 10. [En Línea]. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/801/80100602.pdf>

- **Recuperar y fortalecer la organización política, sociocultural y tradicional del Cabildo Embera Chamí de la Vereda las Palmeras.** (Respeto por el territorio y garantías para que no vuelvan a suceder los hechos violentos).¹⁵⁵

Se formó, afirma el informe, al personal de la Policía y Ejército Nacionales en DDHH, con énfasis en derechos colectivos y legislación de grupos étnicos, de la mano de las autoridades indígenas del cabildo Las Palmeras de la etnia Embera Chamí pueblo identificado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, así:

En los indígenas Embera se presentan diferencias culturales debido al medio en el que viven. Así los Embera están constituidos en dos grandes grupos: Dobida y Eyabida. Los Dobida son la gente cuyo modo de vida gira en torno al río: sus casas y huertos están a orillas del río, la pesca es una actividad permanente. Entre los Eyabida que se encuentran los Embera Katío y los Embera Chamí. Los Embera Chamí comparten la historia prehispánica y colonial de los Embera, caracterizada por su continua resistencia a las incursiones conquistadoras hasta el siglo XVII, cuando la mayoría de los pueblos huyeron hacia las selvas. Este pueblo se destaca por la dispersión de sus asentamientos ubicados sobre las cuencas de los ríos, en donde han desarrollado por cientos de años una cultura adaptada a los ecosistemas de selva húmeda tropical. Su organización política recae en el cabildo, figura que a pesar de ser esencial para las relaciones externas de la comunidad, no ha desplazado el poder de las autoridades tradicionales para establecer formas de control social. Al igual que para los demás grupos emberá, el Jaibaná, hombre o mujer, tiene una función de gran importancia en el manejo de la vida mágico-religiosa del grupo¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 48.

¹⁵⁶ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Página Web. En Línea: tomado de: <https://www.onic.org.co/pueblos/1095-embera-chami>. “Cultura e Historia”

Se realizó, se indica, un acto de reconocimiento por parte de las autoridades departamentales y locales frente a la labor que cumple la comunidad Embera Chamí en el territorio, rechazando cualquier tipo de injerencia armada en su contra. Apoyo en la conformación de un resguardo indígena en la zona, así como la capacitación y formación en DDHH y legislación indígena, tanto nacional como internacional, educación en aspectos como la consulta previa, gestión de proyectos, becas de formación docente. Valoración de sus conocimientos ancestrales en medicina a través de la botánica, y finalmente la ampliación del territorio, a fin de preservar su supervivencia.

Las comunidades indígenas hacen parte del patrimonio inmaterial de la nación¹⁵⁷, por lo tanto, es una obligación del Estado colombiano protegerlos y hacer lo necesario para que su universo cultural se mantenga en el tiempo. Los Emberá, al igual que muchas otras etnias tienen propiedad comunitaria sobre el territorio y también han constituido cierto tipo de organizaciones como el cabildo, que facilitan el funcionamiento interno de su sociedad.

Por ello, es necesario que tanto el Estado como los grupos armados, respeten a estas comunidades y sus territorios ancestrales, dado que, al ser un grupo étnico, la violencia amenaza de manera directa su continuidad y existencia como parte del patrimonio cultural del país.

- **Recuperar y fortalecer la organización política, sociocultural y tradicional del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Vereda Villa Arboleda:** (Recuperación y fomento de la identidad étnica, socio cultural y de memoria histórica de la comunidad negra de Villa Arboleda; Fortalecimiento organizativo y participativo que promueva la autonomía comunitaria y la recuperación del tejido social; Promoción e

¹⁵⁷ GONZÁLEZ, Nila Leal. Patrimonio cultural indígena y su reconocimiento institucional. Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 2008, no 56, p. 31.

implementación de estrategias comunitarias que fomenten la autonomía alimentaria y el bienestar colectivo de la comunidad; Implementación de un modelo de gestión territorial autónomo; Creación de un modelo etnoeducativo que resalte el valor de las comunidades negras en la historia de la nación; Construcción de un polideportivo en la Vereda Villa Arboleda).¹⁵⁸

Al igual que los demás miembros de la comunidad, se afirma en el informe, se procedió a atender psicosocialmente a esta población específica, incentivando sus prácticas culturales entorno a su medicina tradicional, y en general respecto de sus prácticas ancestrales. Igualmente se acompañó de un proceso de memoria histórica que los identifique con el territorio, evidenciando la importancia cultural de la oralidad en la transmisión del conocimiento. Formación en DDHH, Derechos colectivos, y en mecanismos de participación ciudadana como la consulta previa, mediación de conflictos, procesos de auto organización; prácticas agrícolas que garanticen la seguridad alimentaria.

Al igual que las comunidades indígenas, la población afrodescendiente también hace parte de la cultura del país y en tanto sus tradiciones, oralidad y costumbres son parte del patrimonio nacional, también es necesario que el Estado les reconozca, en el caso de El Tigre, como víctimas del conflicto y por ello, se han generado acciones necesarias que le permitan a la comunidad de Villa Arboleda, continuar con sus prácticas tradicionales y su universo cultural.

Por ello, se destaca que haya un fortalecimiento de la parte administrativa y política del Consejo Comunitario, que facilite y estreche las relaciones entre la población y el Estado, con el fin de generar canales de comunicación que permitan el adecuado disfrute de los derechos de la población.

¹⁵⁸ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 49.

- **Garantías para ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición: (Garantías de no repetición; Garantías para el ejercicio de los derechos a la verdad y a la justicia).** ¹⁵⁹

Se consolidó, indica el documento en estudio, los mecanismos de alertas tempranas promovido por la Defensoría del Pueblo a fin de prevenir hechos lamentables como los acaecidos el fatídico 9 de enero de 1999; de igual manera se auscultó con claridad un sistema de protección de víctimas y líderes sociales, dichos mecanismos van de la mano de las competencias de las entidades del orden nacional como Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación en asocio con el Ministerio de Defensa, a fin de enfatizar que las víctimas de este hecho lamentable no eran miembros de la FARC E.P., sus auxiliadores o se trataba de milicianos, pues la estigmatización se agudizó con dicho hecho de sangre y es necesario reconocer y dignificar a las víctimas, promoviendo actos de petición de perdón públicos.

Y continúa afirmando el Plan de Reparación Colectiva que de igual manera se promovió por parte de las autoridades de los distintos niveles, la adopción de mecanismos que promuevan la no repetición en los hechos en el territorio, para lo cual se deberán revisar las políticas públicas relacionadas con las aspersiones derivadas del Plan Colombia, y la vulnerabilidad en la que permanece la comunidad frente a la posible amenaza de organizaciones armadas ilegales que aún merodean la zona.

Frente a las garantías de verdad y justicia se promovió, afirma el Plan, el esclarecimiento de los hechos, unificando la verdad de lo acaecido, para lo cual es necesario determinar con exactitud los autores tanto materiales como intelectuales, y el grado de participación, identificándolos plenamente, de algunos funcionarios públicos en ese hecho execrable, así mismo determinar claramente qué personas fueron víctimas y reconocerles como tal, tratando de ubicar las personas

¹⁵⁹ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 52.

desaparecidas e inhumando y exhumando las que sean necesarias para determinar quiénes son; dicho proceso irá de la mano, se indica, de una investigación respecto de la violación de Derechos Humanos de la que haya sido objeto la comunidad intervenida con este plan, por lo que es pertinente comunicarle permanentemente a la comunidad lo avances en materia de Justicia y Paz, que ayuden a esclareces estos hechos.

La garantía del acceso a verdad y justicia es esencial para dar trámite a los procesos de reparación de la población en tanto sujeto colectivo. Que el Estado reconozca los desaparecidos como víctimas y no como combatientes es fundamental en el proceso de creación de tejido social en la comunidad, que se dignifique a las víctimas.

Por otro lado, es necesario que en la zona siga aumentando la presencia institucional del Estado, no solamente de la Fuerza Pública, sino también de los órganos de control, y demás entes que pueden mejorar las condiciones de vida de la población. Finalmente, la cuestión de los cultivos ilícitos merece una revisión exhaustiva de las autoridades, además de replantear la idea de realizar aspersiones aéreas, teniendo en cuenta los efectos adversos de esta actividad sobre las personas. Sin embargo, es importante intervenir la situación de los cultivos a fin de evitar que nuevos grupos armados se vean atraídos hacia dicha región puedan ocasionar nuevas agresiones contra la población, esto es vital en el ejercicio de no repetición.

- **Fortalecimiento a la organización Junta de Vivienda Urbanización Villas Marías a través de apoyo para la organización comunitaria y gestión de apoyos – subsidios para vivienda de interés social.**¹⁶⁰

En el Plan analizado se indica el apoyo en subsidios para la construcción y mejoramiento de vivienda en la Urbanización Villas María.

¹⁶⁰ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 55.

Se debe recordar que una de las acciones de los grupos armados en El Tigre, consistió en la quema y destrucción de viviendas. Por lo tanto, se hace necesario que por parte del Estado haya una reparación en este aspecto y se le garantice a la comunidad su derecho a una vivienda digna y que esto, además, contribuya con la permanencia de los habitantes en el territorio, lo que, a su vez, va facilitar el desarrollo de las diferentes actividades económicas, culturales, comunales y comerciales de la Inspección.

En conclusión, son muchas las acciones que debe realizar el Estado a fin de reparar los derechos de la población de El Tigre, son diversos los proyectos de inversión social que deben realizarse, si se desea que este proyecto piloto de reparación comunal o de sujeto colectivo tenga éxito. Porque se debe recordar que el objetivo no es brindarles a las personas lo que tenían antes de las acciones violentas, porque no es una cuestión posible, y más si se tiene en cuenta las pérdidas humanas de familiares y seres queridos.

Por lo que, la obligación del Estado debe versar sobre garantizar los derechos de la población, privilegiar la presencia institucional y, sobre todo, permitir el desarrollo de la comunidad y garantizar la no repetición o la revictimización de la misma.

2.1.5. PROBLEMA CENTRAL EN EL PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA EL TIGRE.

La política pública de víctimas si bien ha realizado diferentes mecanismos de reparación para los sujetos que han sufrido el conflicto armado en Colombia, después de realizar una salida de campo mediante encuestas al sujeto colectivo El Tigre, se evidenció que aún existen algunos problemas y fenómenos que hacen que la población no se sienta en su totalidad reparada, y peor aún, no es posible ajustar el proceso de reparación.

El artículo 49 de la Ley 975 de 2005¹⁶¹ creó la obligación de establecer un Programa Institucional de Reparación colectiva que respondiera a tres objetivos: a) la recuperación de la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho. b) la recuperación de los derechos de los ciudadanos y c) la dignificación de las víctimas. La fijación de estos objetivos parte del reconocimiento del impacto de la violencia, no solo a nivel individual o del goce individual de los derechos de los ciudadanos, sino en la dimensión colectiva del ejercicio de estos.

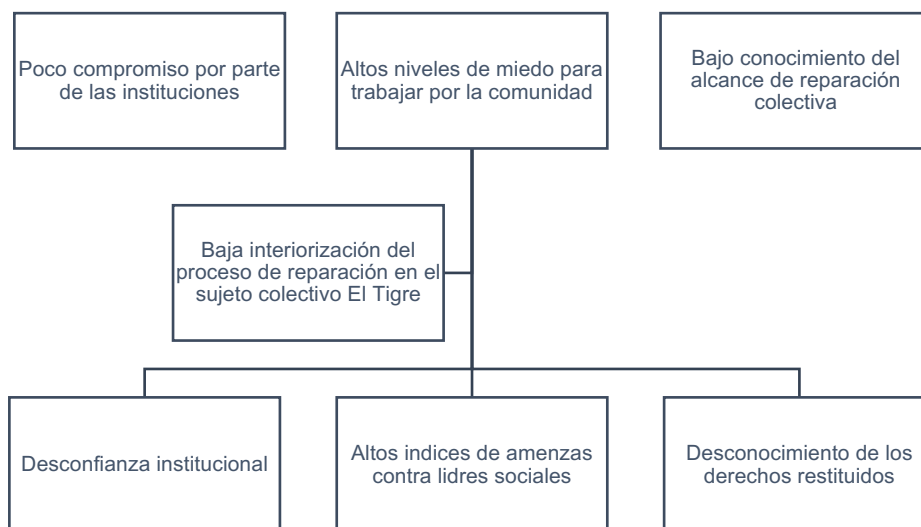
La reparación colectiva debe entenderse como el fruto de un proceso coordinado entre los diferentes actores del territorio, siendo los ciudadanos/as, colectivamente considerados, los actores políticos fundamentales, y no como un conjunto de medidas materiales ofrecidas por el Estado. Así, la Reparación Colectiva para la Inspección de El Tigre, debe partir de una realidad en la que esté comprometida la institucionalidad del Estado. Se trata de abordar la integralidad del problema: Estado, comunidad y territorio, a fin de crear políticas públicas que solucionen definitivamente los conflictos suscitados, tal como lo afirma GAVILANES:

*Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.*¹⁶²

¹⁶¹ **Artículo 49.** Programas de reparación colectiva. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.

¹⁶² GAVILANES, Raúl Velásquez. Hacia una nueva definición del concepto “política pública”. Desafíos, 2009, vol. 20, p. 156. [En Línea]. Recuperado de: <http://bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/680/1/69005352.2014.pdf>

Es por esto, que a partir de la evidencia de salida de campo (Ver Anexo N° 1) se realizó un árbol de problemas, método por el cuál en materia de políticas públicas permite identificar las principales causas y consecuencias de un problema central, que en este caso particular muestra una baja interiorización del proceso de reparación en el sujeto colectivo El Tigre:



A partir de las encuestas que se realizó al sujeto El Tigre se ha evidenciado que aún persisten algunos problemas para la comunidad, y que si bien identifican un proceso en el cuál lograron constituirse nuevamente en su territorio, se evidencia que persisten algunos fenómenos tales como la desconfianza institucional dado que si bien la implementación del proceso de reparación le correspondía principalmente a la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no se tuvo acompañamiento por parte de otras entidades para reparar todos los derechos que fueron violentados en el conflicto armado para este sujeto.

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación, se presentan algunos de los comentarios realizados por el Sujeto de Reparación Colectiva El Tigre con relación

a las dificultades fueron las más recurrentes en el proceso de formulación e implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva¹⁶³

La comunidad indicó que no había la suficiente confianza entre los miembros de la comunidad para adelantar un proceso de reparación colectiva; así mismo precisaron que las instituciones responsables de la implementación no tenían el suficiente compromiso para desarrollar acciones de reparación colectiva. Por otro lado, manifestaron los pobladores de El Tigre tener algún grado alto de desconfianza frente al proceso al indicar que: “No creíamos en nadie. Menos en las instituciones. Para nosotras nos daba pánico y miedo escucharlos”, y al afirmar que Mucha desconfianza de verdad no creíamos. ya que fuimos engañados muchas veces.

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

Dada esta desconfianza, el sujeto colectivo EL Tigre, no reconoce los derechos que la institución responsable de implementar el proceso de reparación pudo haber reparado, sino que identifican a esta entidad como el responsable único para brindarle y reconocerlos todos los derechos que pudieron haber sido vulnerados.

Sin embargo, es importante mencionar que si bien la UARIV es la entidad responsable de ejecutar un proceso de reparación integral en los sujetos que fueron víctimas del conflicto armado, la responsabilidad de restituir no solo los daños ocasionados sino de reparar los derechos vulnerados es de todo el Estado.

De esta forma es importante precisar que la UARIV es el responsable de realizar el seguimiento y evaluación de los procesos y procedimientos implementados en el esquema de reparación. Esto hace que los sujetos tengan un poco más de confianza en las instituciones y permitan legitimar sus acciones a partir del acompañamiento que se les puede llegar a brindar.

¹⁶³ Encuesta materializada a pobladores de El Tigre, el mes de noviembre de 2020 con ocasión del trabajo de investigación.

Esto quiere decir que para un proceso de reparación debe ser incluido todo el aparato estatal ya que por la competencia que tiene cada una de las instituciones pueden llegar a aportar de una mejor manera el proceso de reparación.

De igual forma es importante implementar diferentes mecanismos de aprendizaje para los sujetos que les brinde los lineamientos y estrategias principales para reconocer que derechos se pueden reparar teniendo en cuenta la competencia de cada una de las entidades, porque si bien los daños ocasionados por el conflicto armado en Colombia fueron desgarradores, no sólo se debe de solicitar el acompañamiento de una entidad, sino por el contrario de realizar control social por parte de los sujetos ante el estado para construir un tejido social con la mayor parte de las entidades dado que algunas pueden proporcionar otro tipo de soluciones que harían más integral el proceso de reparación.

3.1. RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES.

Es importante poner de presente, que, si bien el proceso adelantado hasta el momento brindó elementos muy importantes para la reparación colectiva, es la ejecución de las medidas de reparación lo que le permitirá al Estado colombiano cumplir por los propósitos del artículo 49 de la Ley 975 de 2005¹⁶⁴

En este sentido, de acuerdo con el propósito reparador de este plan, resulta indispensable que, en la ejecución de las medidas de reparación, las instituciones del Estado observen las siguientes características; partir del reconocimiento por parte del Estado, de dos aspectos principalmente importantes, esto es, reconocer que la comunidad del Valle del Guamuéz es un sujeto colectivo, indebidamente estigmatizado y víctima de violaciones a los derechos humanos, perpetradas por los diferentes grupos armados en medio del conflicto armado; y así mismo reconocer la responsabilidad que le asiste a la institucionalidad en los daños causados a la

¹⁶⁴ *Ibidem..*

comunidad de El Tigre, por acción y/u omisión, y rechazar enfáticamente la ocurrencia de los hechos violatorios de los derechos humanos individuales y colectivos de esta comunidad y comprometerse con la no repetición.

La reparación a las víctimas parte del hecho de que exista una presencia integral de las instituciones estatales en el Valle del Guamuéz, es decir, que no solo exista presencia de las Fuerzas Armadas como garantes de la seguridad sino, que también existan labores asociadas a instituciones como: la Fiscalía, en la búsqueda de los desaparecidos, el ICBF en el restablecimiento de los derechos de los menores, a la Procuraduría en la verificación de las garantías de los derechos de la población, etc.

A continuación, se menciona una de las recomendaciones más importantes a las instituciones involucradas dentro del proceso de reparación de la comunidad de El Tigre:

Se recomienda a las autoridades que resulten electas para dirigir los entes territoriales, incorporar en los planes de desarrollo 2012 – 2015 la reparación colectiva dentro de sus líneas de acción y destinar recursos para la ejecución de las medidas propuestas en el plan de la comunidad de la Inspección de El Tigre. De otra parte, la institucionalidad del Estado deberá permitir y fomentar los ejercicios de veeduría ciudadana respecto a la inversión de los recursos públicos en estas acciones¹⁶⁵.

3.2. BREVE EVALUACIÓN AL PROYECTO PILÓTO.

Con el fin de hacer una evaluación al proyecto piloto de restitución de derechos de la comunidad de El Tigre, a continuación, se presentan dos de las preguntas más representativas realizadas a la comunidad, que dan un pequeño panorama frente a la percepción de la comunidad respecto al papel del Estado en su territorio por medio una encuesta realizada a 16 personas de la comunidad:

¹⁶⁵ Op. Cit. PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA p. 59.

Después de que el Estado colombiano implementó el 100% del Plan Integral de Reparación Colectiva de El Tigre, en una escala de 1 al 5, ¿qué tanto considera usted que se han reparado los daños colectivos ocasionados en el marco del conflicto armado? Siendo 1 el menor grado y 5 el mayor.

La respuesta recurrente fue indicar como factor de satisfacción frente a la reparación el número tres (3), lo que nos permite inferir un grado medio

En una escala del 1 al 5 ¿cuál fue el grado de participación de la comunidad tanto en la definición como en la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva de la comunidad de EL Tigre? Siendo 1 el menor grado y 5 el mayor.

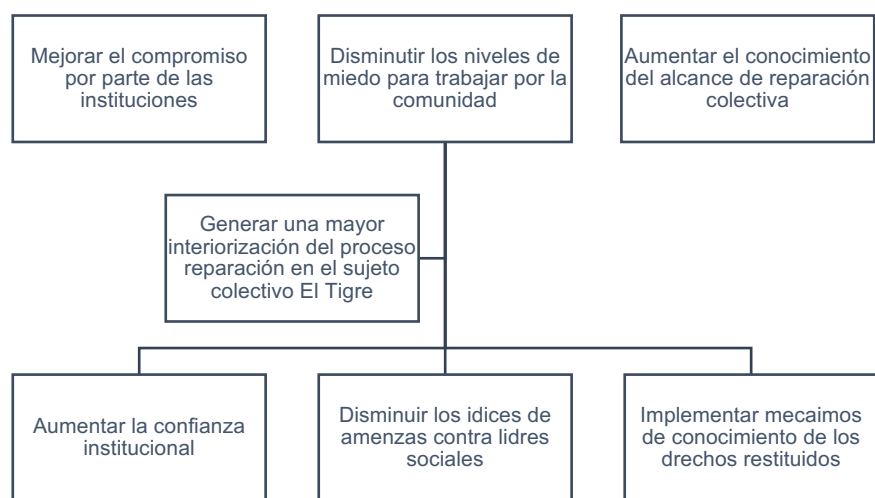
La respuesta más frecuente fue la cuatro (4) indicando con ello un grado mayor de satisfacción en la implementación.

Es de aclarar frente a lo anterior, que uno de los problemas a los que se enfrenta la comunidad radica en el hecho de que hacen parte de un proyecto piloto para la restitución de derechos colectivos, lo cual, hace que los planes o intervenciones del Estado puedan sufrir de retrasos o vacíos, por lo que no siempre se podrá cumplir con el 100% de las expectativas y que, lastimosamente, la ley no permite el desarrollo de un nuevo proyecto para el establecimiento de garantías para la población. Por lo que, son otras comunidades de víctimas, las que podrán gozar de un mejor proceso, que se construirá a partir de las conclusiones y resultados vistos en El Tigre, teniendo en cuenta evaluaciones y retroalimentaciones tomadas a partir de los aportes de la comunidad.

En conclusión, al revisar las 2 preguntas mostradas podemos ver como en la primera hay un grado de aceptación intermedio frente a las labores del Estado, es decir, que si bien la población (*espacio muestral de 16 entrevistados líderes*)

reconoce que han existido esfuerzos por parte de las instituciones, el grado de satisfacción no es el máximo o que, de acuerdo con su perspectiva, pudo ser mejor. En tanto, la segunda pregunta, evidencia un interés marcado de la comunidad por integrarse a los proyectos y crear tejido social, existe un interés por ser restituidos en sus derechos y por contribuir en la creación de espacios de paz y no repetición.

Por lo anterior, a fin de brindar mayor claridad frente a la manera como la comunidad El Tigre percibe su proceso piloto reparador se realiza un árbol de soluciones para identificar las principales alternativas de solución que en la etapa de evaluación y seguimiento se recomendarían para ajustar en el proceso de reparación de los sujetos colectivos, dado que no existe una tipificación que permita identificar y organizar dicho proceso:



A partir de este árbol de soluciones se recomienda principalmente realizar en un proceso de reparación colectiva un proceso psicosocial de interiorización del proceso que vive cada sujeto, permitiendo así el conocimiento del alcance que puede llegar a tener la reparación colectiva.

REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES

En conclusión, el conflicto armado colombiano ha tenido como partícipes a diferentes actores como las fuerzas armadas del Estado, los grupos guerrilleros donde se destacan las Farc, ELN y M-19, así mismo han sido parte del conflicto los grupos paramilitares y agrupaciones dedicadas al narcotráfico que también enfrentaron al Estado como el caso del Cartel de Medellín.

A pesar de que la confrontación ha durado más de cinco décadas es importante mencionar que la desarticulación de varios de los actores ilegales ha sido posible mediante el desarrollo de acuerdos de paz como los llevados a cabo con las guerrillas del M-19 y las Farc o el proceso de desmovilización paramilitar ejecutado a principio de la década de los años 2000.

Mencionar esto es relevante para comprender cuál debe ser la ruta a seguir por el Estado en el tratamiento del conflicto con miras a encontrar las rutas que permitan la resolución de la paz y garantizar los derechos de los ciudadanos y especialmente de las comunidades rurales y étnicas.

Entre las dos primeras décadas del 2000 es importante mencionar como el desarrollo de la justicia transicional abrió las puertas para el reconocimiento y reparación adecuada de las víctimas, siendo esto un suceso que requirió de etapas, como por ejemplo en la conceptualización de víctima y del reconocimiento de las comunidades como un sujeto de derecho, además de las leyes orientadas a la verdad, justicia y reparación.

Finalmente, es igualmente importante mencionar el caso concreto de la comunidad de El Tigre como sujeto víctima del conflicto y como construcción colectiva de sujeto de derecho, además de su voluntad de paz y de generar voces y proyectos concretos que atiendan a las necesidades particulares de sus miembros, mediante

planes que el Gobierno debe atender en materia de educación, conectividad, inclusión, participación política, atención psicológica y creación de tejido social.

La iniciativa de la comunidad de El Tigre abre las puertas para que otras comunidades víctimas de las violencia busquen los espacios para que sus voces y demandas sean escuchadas en miras de lograr el restablecimiento de sus derechos y que la justicia transicional realmente cumpla con todos sus objetivos, porque esta no puede agotarse exclusivamente en el procesamiento de los responsables de delitos atroces, sino que debe tener en cuenta la atención de la ciudadanía y de las víctimas de la guerra.

Finalmente, es preciso concluir que el Estado colombiano a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como responsables de la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, que según el Registro Único de Víctimas a la fecha de corte 31 de marzo de 2021 se encuentran incluidos 767 sujetos de reparación colectiva y entendiendo y recogiendo la experiencia de la reparación de los 23 sujetos que a la fecha tiene un PIRC implementado, entre ellos el Sujeto El Tigre, se vió en la necesidad de expedir el Modelo Operativo de Reparación Colectiva, el cual se formalizó a través de la resolución 3143 de 2018 y su anexo técnico, que buscó dar respuesta a diferentes desafíos que el Programa de Reparación Colectiva presentó durante el periodo anterior al año 2018. Este instrumento de tipo conceptual y operativo fue el resultado de un proceso de cualificación el cual se concentró principalmente los siguientes aspectos:

1. La determinación de las características de los Sujetos Colectivos que pueden hacer parte del Programa. La Ley 1448 de 2011, el decreto 1084 de 2015, y demás normatividad relacionada con la reparación colectiva en Colombia, no tenía un desarrollo conceptual amplio que permitiera operativizar el concepto de Sujeto de Reparación Colectiva. Esto impactaba de manera directa en la identificación de grupos de personas que no necesariamente eran

preexistentes y/o que no tenían procesos históricos de construcción de identidad colectiva.

2. La relación entre las características de los Sujetos Colectivos que se abordaron en el punto anterior, y los daños colectivos ocasionados por el conflicto armado, los cuales son el fundamento de la reparación colectiva, el objetivo mismo de las acciones del Programa a implementar. Los daños colectivos en el marco de procesos de justicia transicional no pueden entenderse como la suma de daños individuales, o daños grupales, por el contrario esta tipología de daños debía tener una relación mucho mas estrecha entre el proceso de construcción y materialización de la identidad colectiva y el impacto que generó el conflicto armado sobre esta.
3. La incorporación de metodologías que permitan al Programa realizar ejercicios reales de planeación, definiendo de manera clara las acciones reparadoras, los costos, los beneficios, los indicadores de seguimiento y resultado, los actores responsables e interesados en dinamizar el Programa de Reparación Colectiva y, entre otros aspectos, que son fundamentales y contribuyen a una efectiva reparación de los daños ocasionados por el conflicto armado. Esto en la medida en que se diera respuesta de manera clara y transparente sobre lo posible y alcanzable en el marco de un proceso de reparación por vía administrativa, ya que como se evidenció en los Planes Integrales de Reparación Colectiva aprobados durante la primera etapa de implementación, no se contaba con acciones que tuvieran un ejercicio de planeación como lo realiza el Estado colombiano, determinando de manera particular bienes o servicios que se pudieran entregar en un tiempo determinado, con unos costos definidos, así como sus respectivos mecanismos de seguimiento.

4. El establecimiento de un monto de inversión mínimo y máximo por parte de la Unidad para las Víctimas en la implementación de un Plan Integral de Reparación Colectiva. Esta definición permitió establecer, sumado a lo anterior, un alcance de la reparación colectiva por vía administrativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUDELO, G. D., & Walker, C. A. (2010). Ley de justicia y paz, un balance de su primer lustro. Universidad de Antioquia.

AGUILERA, M. (2001). Amnistías e indulto, siglos XIX y XX en Revista Credencial núm. 137.

AMBOS, kai. la Ley de Amnistía (ley 1820 de 2016) y el marco jurídico internacional. pp. p.130.

ARIAS, Gerson, et al. Consolidación de Paz en Colombia. Una experiencia integrada en DDR y Desarrollo. Fundación Ideas para la Paz, 2018. p.20.

BEDOYA, F. J., & Agudelo, M. O. (2017). Justicia transicional: Nación de justicia en la transición colombiana. Opinión Jurídica, Universidad de Medellín, 245-266.

BEJARANO, Jesús. Antonio. (1989). Construir la paz: seminario paz, democracia y desarrollo. CINEP.

BELLO, Martha Nubia, Martín Cardinal, E., Millán Echeverría, D. C., Pulido Herráez, B., & Rojas Isaza, R. (2005). Bojayá, memoria y río. Violencia política, daño y reparación. Violencia contra las mujeres/Violencia de género. P. 93

BERNAL, Fernando. Poder y crisis institucional en el campo colombiano. Ilica (Vol. 6)., 1998. p. 16.

BORDA, L. V. (2007). Estado de derecho y Estado social de derecho. Rev. Derecho del Estado, 20, 73. p. 73.

BRITTO RUIZ, Diana, (2010). Justicia Restaurativa. Reflexiones sobre la experiencia en Colombia. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, p. 71.

CALDERÓN, Daniel Pardo; SALAZAR, J. D.; PARA LA PAZ, Fundación Ideas. Reintegración: Reconciliación y Desarrollo desde los Territorios. Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 2015, vol. 41. p.15.

CALLE MEZA, Melba Luz; IBARRA PADILLA, Adelaida María. Jurisdicción Especial para la Paz: fundamentos teóricos y características de la justicia transicional en Colombia. Análisis Político, 2019, vol. 32, no 96, p. 3-20. p. 10.

CAMARGO, Sergio Roberto Matias. La Justicia Especial para la Paz (JEP), sus avances y sus obstáculos. Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales, 2019, no 50, p. 27-37. p. 30.

CARAVACA, I., González, G., & Silva, R. (2005). Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo territorial. EURE (Santiago), 31(94), 5-24. p. 6.

CEBALLOS ROSERO, Franco Alirio, et al. Otros sujetos de derecho o personas (?). Estudios Socio-Jurídicos, 2019, vol. 22, no 1, p. 321-351.

CORREA, Edelmira Pérez. Una visión del desarrollo rural en Colombia. Cuadernos de desarrollo rural, 1998, no 41. p.8

CORTÉS, Rosalvina Otálora. (2008). Economías de guerra e inversión multinacional. Diálogos de saberes, (29), 157-172. P. 159.

DE GREIFF, Pablo. Justicia y reparaciones. DÍAZ, Catalina (Editora). Reparaciones para las víctimas de la violencia política. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2008, p. 407-440. p. 439

DELGADO, Carlos Felipe Rúa. Los momentos de la justicia transicional en Colombia. Revista de Derecho, 2015, no 43, p. 71-109. P.76

DÍAZ, Catalina. La reparación colectiva: problemas conceptuales en perspectiva comparada. Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión, 2009. p. 145-146. [En Línea]. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/Reparar-en-Colombia.pdf>

DOUZINAS, Costas; BECERRA, María Carolina Estepa. La reparación a las víctimas del conflicto en Colombia. Diálogos de saberes, 2010, no 33, p. 219-229. p. 223.

DUQUE Morales, C. R., & Torres Restrepo, L. M. (2015). Las garantías de no repetición como mecanismo permanente para la obtención de paz. P. 271.

DURAN CORTES, Yenid Lucela, et al. ¿Cuál es el alcance jurídico de los criterios de conexidad y de carga argumentativa, que se han establecido por parte de la Corte Constitucional, en lo que refiere a la interpretación del Acto Legislativo 01 de 2016 y el Fast Track?. 2017. p. 4.

ECHANDIA, Castilla. Camilo (1997). Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. pp. 225. p.

GALVIS, L. A., & Roca, A. M. (2010). Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: Un análisis espacial (No. 120). Banco de la Republica de Colombia. p.3

GARCÍA SAYÁN, Diego; GIRALDO MUÑOZ, M. Reflexiones sobre los procesos de justicia transicional. Revista Journal of International Law, 2016, vol. 7, p. 96-143. p.

GONZÁLEZ, Angélica María Anichiarico. Una visión de la terminación de los conflictos armados centrada en la justicia transicional. UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política, 2016, p. 165-194. p. 172.

GUEVARA RODRÍGUEZ, Javier Camilo. Una aproximación a las garantías de no repetición de la ley 1448 de 2011 a la luz del "ideal común" sobre ciudades y asentamientos humanos estipulado en la nueva agenda urbana-hábitat III 2016. 2018. p. 39.

GUTIÉRREZ TAMAYO, Alberto León. Ciudadanía y territorio: Escenario para la Formación Ciudadana. 2009. p. 114.

HERNÁNDEZ, L. A. (2016). Prueba, verdad, verifobia en la justicia transicional. Tensión Derecho, Paz y Justicia, Colombia, Ley 975 del 2005. p. 25.

HERRERA KIT, Patricia; TAYLOR, Stephanie. El Sistema Nacional De Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario: ¿Una Nueva Etapa En La Actuación En Materia De Derechos Humanos En Colombia? (The National System of Human Rights and Humanitarian International Law: A New Stage in the Action for Human Rights in Colombia?). The National System of Human Rights and Humanitarian International Law: A New Stage in the Action for Human Rights in Colombia, 2014. p.67.

LÓPEZ Díaz, C., González, D. & Errandonea, J. (2012). Justicia transicional en Colombia. En A. Forer & C. López Díaz (Eds.), Colombia: un nuevo modelo de justicia transicional. Bogotá, D. C.: GIZ. p. 15.

LÓPEZ, R. E (2015). The collection of memory after mass atrocity and the dilemma for transitional justice. *International law and politics*, 47, 799- 853.

MESA, Jaime Alberto Sandoval; SIERRA, Carlos Alberto Cárdenas. Los principios de la justicia especial para la paz en los acuerdos suscritos con las FARC en Colombia y su relación con la Comisión de la Verdad. *Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión*, 2020, vol. 8, no 15, p. 71-91. p. 78.

NANCLARES, J., & Gómez, A. (2017). La reparación: una aproximación a su historia, presente y prospectivas. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 17(33), 59-80. doi: 10.22518/16578953.899

NASI, Carlo, & Angelika Rettberg. (2005). Los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en evolución permanente. *Colombia internacional*, (62), 64-85. P. 67. [En Línea]. Recuperado de <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint62.2005.04>

OCHOA OCHOA, Bruce David. La Reparación Colectiva como facilitadora de procesos de cohesión social: Una mirada a los procesos de postconflicto latinoamericanos. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), 2015. p. 108.

ORTEGA-HERNÁNDEZ, Mary Cruz; SAYAS-CONTRERAS, Rafaela. El concepto de reparación colectiva en el marco de la justicia transicional. *Vis Iuris. Revista de derecho y ciencias sociales*, 2015, p. 37-54. p.39.

ORTEGA-HERNÁNDEZ, Mary Cruz; SAYAS-CONTRERAS, Rafaela. El concepto de reparación colectiva en el marco de la justicia transicional. *Vis Iuris. Revista de derecho y ciencias sociales*, 2015, p. 37-54. p. 39.

PÉCAUT, Daniel. La pérdida de los derechos, del significado de la experiencia y de la inserción social: a propósito de los desplazados en Colombia. Estudios Políticos, 1999, no 14, p. 13-28. P.25.

PÉREZ, Jordi Bonet; FERNÁNDEZ, Rosa Ana Alija. Impunidad, derechos humanos y justicia transicional. Universidad de Deusto, 2009.

PERÉZ, Jordi. Bonet., & Fernández, Rosa. Ana Alija. (2009). Impunidad, Derechos humanos y Justicia transicional. Universidad de Deusto. 2009. p.12. [En Línea]. Recuperado de <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho53.pdf>

PERRY, S. R. (1994). Las luchas campesinas en Colombia. Bogotá: Ministerio de Agricultura. Restrepo, Juan Camilo. 2002. Reflexiones sobre la descentralización en América Latina. Economía y Desarrollo 1 (2): 5-11

PRADA, N y Poveda, N. (2012). 32 preguntas y respuestas a la ley de víctimas. Bogotá: Corporación Humana.

PULIDO, C. B., Gallego, F. E., Rodríguez, J. C., González, E. S., Díaz, R. E. S., Chávez, E. V., ... & Henao, M. C. (2017). Justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Universidad Externado. Capítulo 2. p. 135.

QUEVEDO, M. D. P., & Jara, S. J. R. (2015). Conflicto y posconflicto: el futuro anhelado, hoy. Ignis, (8), 53-57. p. 54.

RETTBERG, Angelika. Ley de víctimas en Colombia: un balance. Revista de estudios sociales, 2015, no 54, p. 185-188. p. 186. [En Línea]. Recuperado de <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res54.2015.14>

RINCÓN, Tatiana; COVELLI, Tatiana Rincón. Verdad, justicia y reparación: la justicia de la justicia transicional. Universidad del Rosario, 2010. p. 75.

SERBIN, A. (2008). La sociedad civil ante la violencia y los conflictos en América Latina y el Caribe. Pensamiento iberoamericano, (2), 141-162. P. 145 [En Línea]. Recuperado de file:///C:/Users/Home/Downloads/Dialnet-LaSociedadCivilAnteLaViolenciaYLosConflictosEnAmer-2873337%20(1).pdf

SUÁREZ, L. A. C. (2018). El significado real de que Colombia sea un Estado Social de Derecho. DIXI, (27), 5. p. 7-8 [En Línea]. Recuperado de <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/2390/2420>

TEITEL, Ruti. Genealogía de la justicia transicional. Harvard Human Rights Journal, 2003, vol. 16, p. 69-94. p. 70.

TORRES CARRILLO, Alfonso. Organizaciones populares, construcción de identidad y acción política. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2006, vol. 4, no 2, p. 167-199. p. 169

UPRIMNY, R. (2005). ¿Existe o no conflicto armado en Colombia? p. 4. [En Línea]. Recuperado de <https://www.dejusticia.org/existe-o-no-conflicto-armado-en-colombia/>

UPRIMNY, Rodrigo; SAFFON, María Paula. Capítulo 7 Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades. Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional, 2005, vol. 211. p. 214.

VALDERRAMA-BEDOYA, F. J., & Ortiz-Agudelo, M. O. (2017). Justicia transicional: Noción de la justicia en la transición colombiana. Revista Opinión Jurídica, 16(32), 245-266. P. 12

VALDERRAMA-BEDOYA, Francisco Javier; ORTIZ-AGUDELO, Marvin Octavio. Justicia transicional: Noción de la justicia en la transición colombiana. Revista Opinión Jurídica, 2017, vol. 16, No 32, p. 245-266. p. 247.

VÁZQUEZ, T. (2009). El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado. *Revista Controversia*, (192), 122-161. p. 123 [En Línea]. Recuperado de

VELA Orbegozo, Bernardo. Colombia no es una isla.: Una contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en el entorno global. U. Externado de Colombia. 2015. Pp. 284. p. 12.

VILLA, H. V. (1987). Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano (No. 11). Universidad Nacional de Colombia. p.

VILLA, Hernando Valencia; JOINET, Louis. Introducción a la justicia transicional. Claves de razón práctica, 2008, vol. 180, p. 76-82. p. 1.

WIESNER LEÓN. Héctor. Capítulo II. *“La actividad empresarial en los conflictos armados y su influencia en los Derechos Humanos: comentarios al caso colombiano”*. En: *Derechos humanos y la actividad empresarial en Colombia: implicaciones para el estado social de derecho* / Julián Tole Martínez, editor; Antonio Moreira Maués [y otros]. – Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2019. p. 454.

WIESNER LEÓN. Héctor. *“Una perspectiva habermasiana de la justicia transicional en el proceso de paz en Colombia”*. En: Montes Cortés, C., Moreno Cruz, D., Estrada Valencia, F., Padrón Pardo, F., Barbosa Delgado, F., Vargas Vaca, H., León, H., Caicedo Chaparro, J., Correa Henao, M., Lozada Gómez, M., Medina García, M., Ordóñez Narváez, V. y Sierra León, Y. (2018). *¿El estado constitucional en jaque?* Tomo III. Bogotá, Colombia: Fundación Universidad Externado de Colombia. p. 203.

LEGISLACIÓN NACIONAL.

Acto Legislativo 01 del 2012, Congreso de la República de Colombia, “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”

ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2016. (julio 7). Diario Oficial No. 49.927 de 7 de julio de 2016. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Art. 1. Ley 975 de 2005.

Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

DECRETO 4634 DE 2011. (Diciembre 09). Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano.

Diario Oficial No. 48.278 de 9 de diciembre de 2011.

DECRETO LEY 4633 DE 2011. (Diciembre 09). Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Diario Oficial 48278 de diciembre 9 de 2011.

DECRETO-LEY 4635 DE 2011. (diciembre 9). Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Diario Oficial No. 48.278 de 9 de diciembre de 2011.

LEY 1448 DE 2011. (junio 10). Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Ley 1448 de 2011. (Víctimas y Restitución de Tierras)

LEY 1820 DE 2016. (diciembre 30). Diario Oficial No. 50.102 de 30 de diciembre de 2016. “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.

LEY 418 DE 1997. (diciembre 26). Diario Oficial No. 43.201, de 26 de diciembre de 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

LEY 548 DE 1999. (diciembre 23). Diario Oficial No 43.827, de 23 de diciembre de 1999. Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones.

LEY 782 DE 2002. (diciembre 23). Diario Oficial No. 45.043, de 23 de diciembre de 2002. Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.

LEY 975 DE 2005. (julio 25). Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

DOCUMENTOS TÉCNICOS.

COLOMBIA, C.D. (2018) Presidencia de la República de Colombia. XIII Informe sobre los avances de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto. Julio – 2018. P. 7.

COLOMBIA, O. I. M. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Modelo de Reparación Colectiva. 2020. p. 25

COLOMBIA, O. I. M. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Anexo Técnico. Resolución 3143 de 2018 del modelo de reparación colectiva p.4

COLOMBIA, O. I. M. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Reparación Colectiva. ¿Qué es la reparación colectiva?

COLOMBIA. Centro Internacional para la Justicia Transicional (2009).

COLOMBIA. Ministerio de Justicia y del Derecho. ABC LEY DE AMNISTÍA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES.

DE MEMORIA HISTÓRICA, GMH-Grupo. Centro Nacional de Memoria Histórica. DAÑOS: análisis de los impactos del conflicto armado colombiano. Bogotá, Colombia, 2008. p. 16.

LA PAZ, Alto Comisionado Para. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Bogotá DC, Colombia.

RESOLUCIÓN 60/147 de la Asamblea General ONU. (principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones). Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.

RESOLUCIÓN número 03143 de 2018, por la cual se adopta el modelo operativo de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Diario oficial del 12 de sept. 2018.

SENTENCIAS CORTE CONSTITUCIONAL.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-007 (1 de marzo de 2018). M.P. Dra. FAJARDO RIVERA, Diana.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-025 (22 de enero de 2004). M.P. Dr. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. Y Sentencia T-045 (2 de febrero de 2010). M.P. Dra. CALLE CORREA, María Victoria.